INFORME ANUAL DE PAÍS SOBRE LAS PRÁCTICAS DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS 2009

El 28 de junio, el ejército destituyó al presidente José Manuel Zelaya y lo forzó a salir exiliado, y el presidente del congreso Roberto Micheletti Bain se convirtió en el mandatario de facto. Hasta el golpe de estado del 28 de junio (en lo sucesivo, el golpe de junio), el país era un democracia constitucional multipartidista, con una población de aproximadamente ocho millones de habitantes. El golpe estuvo precedido por meses de tensión política entre el ejecutivo y los demás poderes del gobierno debido a una propuesta del ejecutivo de celebrar un referendo para convocar a una asamblea constitucional que consideraría realizar reformas a la Constitución. Aunque el golpe no fue sangriento, los acontecimientos que le siguieron tuvieron como resultado la pérdida de vidas además de limitaciones impuestas por el régimen de facto a la libertad de circulación, asociación, expresión y reunión. El 29 de noviembre, el electorado eligió a Porfirio “Pepe” Lobo, del Partido Nacional, como presidente para un período de cuatro años. Los observadores internacionales calificaron estas elecciones como libres y justas en general. Aunque las autoridades civiles en general mantuvieron un control efectivo de las fuerzas de seguridad antes del golpe de junio, hubo casos en los que elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente de la autoridad del gobierno.

Han llegado informes de las siguientes infracciones de los derechos humanos: homicidios extrajudiciales a manos de oficiales de la policía y agentes del gobierno; homicidios arbitrarios y sumarios cometidos por grupos parapoliciales y por antiguos miembros de las fuerzas de seguridad; condiciones duras en las prisiones; violencia contra los detenidos y corrupción e impunidad dentro de las fuerzas de seguridad; detenciones preventivas prolongadas e incumplimiento de las garantías procesales que marca la ley; detención arbitraria y el uso de fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad después del golpe de junio; politización, corrupción y debilidad institucional del poder judicial; deterioro de la libertad de prensa; corrupción en los poderes legislativo y ejecutivo; limitación de la libertad de circulación y asociación; restricciones gubernamentales en el reconocimiento de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG); violencia y discriminación de la mujer; prostitución infantil y maltrato a menores; trata de personas; discriminación de comunidades indígenas; violencia y discriminación de personas debido a su orientación sexual; implementación ineficiente de las leyes laborales; y trabajo infantil.

Durante la crisis política después del golpe de junio, se realizaron manifestaciones en todo el país. Se implementaron toques de queda arbitrariamente, en los que las fuerzas de seguridad usaron la fuerza de forma excesiva, lo cual en algunos casos causó la pérdida de la vida y provocó actos de vandalismo por parte de los manifestantes. El régimen de facto también limitó la libertad de reunión y restringió la libertad de la prensa. Cabe destacar que el 1 de julio, el 26 de septiembre y el 5 de octubre, el régimen de facto promulgó decretos que suspendieron la Constitución durante las horas del toque de queda y limitaron considerablemente la libertad de expresión, reunión y asociación.

RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 Respeto de la integridad de la persona, que incluye el derecho a no ser objeto de:

a. Privación arbitraria o ilícita de la vida

Antes del golpe de junio, hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilícitos, especialmente de niños y jóvenes a manos de grupos parapoliciales que pueden haber incluido a miembros de las fuerzas de seguridad. Después del golpe de junio, hubo informes de que el régimen de facto o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilícitos.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos informó que entre enero y noviembre recibió 63 denuncias de homicidios en los cuales presuntamente habían participado miembros de la policía o del ejército. La fiscalía levantó cargos en algunos de los casos. El gobierno cuenta con una Unidad Especial de Investigación sobre Asesinatos de Menores, pero las investigaciones rara vez identificaron a los autores.

Hasta diciembre, Casa Alianza había registrado el homicidio de 159 menores de menos de 18 años de edad y de 468 jóvenes entre 19 y 22 años de edad, comparado con 128 y 416 respectivamente durante 2008. Casa Alianza informó que más del 50 por ciento de los homicidios fueron cometidos por agresores desconocidos, mientras que se atribuyó un número menor a fuerzas de seguridad privadas, agentes del gobierno y pandillas.

A lo largo del año, varios grupos y familiares de víctimas menores de edad afirmaron haber proporcionado a los fiscales pruebas de colusión entre elementos de la policía y líderes empresariales en la comisión de los homicidios. Aunque observadores relacionaron algunos de los homicidios de alto perfil —como los de ambientalistas, líderes laborales, abogados y políticos— con el crimen organizado y el narcotráfico, otros casos parecieron estar motivados por razones políticas.

Entre los homicidios registrados antes del golpe de junio están los siguientes:

El 18 de enero, actores desconocidos mataron a tiros a Marlene Suyapa Gavarrete de Rubí en Choloma durante el robo de una tienda de comidas. Gavarrete había sido abogada defensora en juicios de miembros de pandillas. Al final del año, continuaba la investigación.

El 24 de enero, agresores desconocidos presuntamente robaron el vehículo de Rodrigo Eugenio Valladares Pineda, hijo del ex comisionado de derechos humanos Leo Rodrigo Valladares Lanza, y lo mataron a tiros junto con Edmund Jeffry Trochez e Isaiah Nahum Bonilla Escobar. El 31 de enero, la policía arrestó a Norman Gilberto Reyes, presunto miembro de una pandilla de ladrones de vehículos. Al final del año, Reyes estaba a la espera de su juicio.

El 13 de febrero, agresores desconocidos dispararon y mataron a Marco Tulio Velásquez en Santa Rosa de Copán. Velásquez había sido candidato a diputado del departamento de Copán. Al final del año, la investigación seguía en pie.

El 28 de febrero, agresores desconocidos mataron a tiros al ambientalista José Miguel Pagoada Tercero mientras trabajaba en terrenos que había ayudado a reforestar en la comunidad de Hato de Enmedio. Al final del año, continuaba la investigación.

El 7 de marzo, en San Pedro Sula, agresores desconocidos le dispararon de muerte al candidato a diputado del Partido Liberal Óscar Heberto Mejía Villafranca, quien fuera asesor del alcalde de San Pedro Sula. Al final del año, la investigación seguía en pie.

El 22 de marzo, dos desconocidos dispararon de muerte a Miguel Ángel Reyes, activista por los derechos de la tenencia de la tierra en Cofradía. El 27 de abril, desconocidos dispararon y mataron a Juan Ángel Rivera González, otro activista por los derechos de la tenencia de la tierra de Cofradía. Las autoridades arrestaron a Adán Rodríguez Cabrera por el homicidio de Rivera, y la investigación continuaba a finales del año.

El 15 de abril, desconocidos mataron a tiros a Odilio Acosta y a Santos Aguilar del Movimiento Campesino de Rigores en Trujillo, Colón. Acosta y Aguilar habían participado en una disputa por la tenencia de la tierra. A finales del año, no había información disponible de alguna investigación respecto a este incidente.

El 3 de junio, varias personas que presuntamente vestían uniforme para hacerse pasar por policías, mataron a tiros a Andres Reyes, Marlon Javier Turcios, Heberto Rendón, Félix Omar Mallorquín, Dagner Canales, Santos Sabillón, Carlos Villatoro, Allan Belis, y Harry Plama en Saba, departamento de Colón. Las nueve víctimas eran empleados del terrateniente Miguel Reyes. La policía informó que es posible que el incidente haya estado relacionado con el narcotráfico. Al final del año, continuaba la investigación.

Se informó que los siguientes casos estuvieron relacionados con los disturbios políticos del golpe de junio:

El 5 de julio, agresores desconocidos le dispararon de muerte a Isis Obed Murillo durante una manifestación contra el golpe de estado en el aeropuerto Toncontín. ONG de derechos humanos manifestaron que la bala que mató a Murillo era del mismo calibre que las usadas por el ejército. Al final del año, el Ministerio Público estaba realizando una investigación y había solicitado que el ejército entregara las armas de fuego portadas en el aeropuerto el 5 de julio. Según informes, el ejército se negó a hacerlo.

El 1 de agosto, Roger Vallejo murió a causa de las heridas de bala que recibió durante una manifestación en contra del golpe de estado en Tegucigalpa el 30 de julio. Al final del año, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos investigaba el incidente.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país entre el 17 y el 21 de agosto para evaluar la situación de los derechos humanos recibió una denuncia que el 2 de agosto un oficial del ejército le dio un disparo fatal en la cabeza a Pedro Pablo Hernández en un retén militar en Jamastrán durante las horas del toque de queda. El ejército detuvo al oficial sospechoso de disparar. La investigación por parte de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos seguía pendiente al finalizar el año.

El 22 de septiembre, durante el toque de queda en San Pedro Sula, el agente de la policía Denis Omar Montoya supuestamente disparó y mató a Jacobo Perdomo, de 19 años de edad. Perdomo

circulaba en bicicleta desarmado y no obedeció a Montoya cuando le ordenó detenerse. Las autoridades emitieron una orden de arresto en contra de Montoya. A finales del año, Montoya seguía prófugo y la investigación continuaba.

El 22 de septiembre, se informa que agresores desconocidos montados en una motocicleta le dispararon a Jairo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Formación Profesional durante una protesta en contra del golpe de estado en Tegucigalpa. El 17 de octubre, Sánchez murió a causa de sus heridas por los disparos. A finales del año, las autoridades realizaban una investigación.

El 23 de septiembre, la Dirección Nacional de Investigación Criminal confirmó que desconocidos dispararon mortalmente contra Francisco Moncada Alvarado cuando la policía dispersaba una manifestación en contra del golpe de estado en el barrio Flor del Campo en Tegucigalpa. Al final del año, continuaba la investigación.

El 27 de noviembre, según se informa, agresores desconocidos dispararon al automóvil de Ángel Salgado mientras cruzaba un retén militar en Tegucigalpa. Como resultado de los disparos, Salgado fue herido en la cabeza, perdió el control del vehículo, e hirió de gravedad a un transeúnte. Testigos informaron que los miembros de las fuerzas de seguridad retiraron todas las pruebas inmediatamente después del incidente. Personas desconocidas llevaron a Salgado al Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde murió a causa de sus heridas. A finales del año no había información de alguna investigación sobre el caso.

Los siguientes casos se iniciaron antes de 2009:

En enero la policía anunció que la pandilla responsable del homicidio de la dirigente obrera Altagracia Fuentes en abril de 2008 (véase la sección 7.a.) también fueron los homicidas de Mario Fernando Hernández Bonilla, diputado del congreso del Partido Liberal y vicepresidente del Congreso. El 19 de enero, las autoridades emitieron órdenes de captura contra cuatro integrantes de la banda relacionados con los homicidios. Al final del año, los sospechosos continuaban prófugos.

No se supo de avances relacionados con el homicidio en agosto de 2008 de 11 personas involucradas en una disputa por la tenencia de la tierra entre familiares del agente de la policía Henry Osortes y el Movimiento Campesino del Aguán (MCA).

Al final del año, las autoridades arrestaron a Julio César Galán Rodríguez por el homicidio en junio de 2008 de Irene Ramírez, integrante del MCA.

No hubo avances nuevos, ni se esperaba que los hubiera, en la investigación del homicidio en 2008 de Shamir Guifarro Ramírez, Henry Arturo Chacón y Nelda Ochoa, el padre, suegro y suegra, respectivamente del ambientalista Mario Guifarro que fue asesinado en 2007.

En marzo la policía arrestó a Amilcar Antonio Hernández por el homicidio en octubre de 2008 del activista por los derechos de la tenencia de la tierra y líder comunitario Elías Murcia. A finales del año, Hernández estaba en prisión preventiva. No hubo más información respecto al

estado de los casos de Fredi Osorto y Ubence Agilar, que también fueron asesinados con Elías Murcia en octubre de 2008.

No hubo avances en la investigación del homicidio en noviembre de 2008 de Danilo Edgardo Castro Hernández, candidato a vice alcalde de Morazán por el Partido Liberal.

No hubo nuevos avances, ni se esperaba que los hubiera, respecto al homicidio en 2007 del líder garífuna Félix Ordoñez Suazo en Punta Piedras, departamento de Colón.

No hubo nuevos avances, ni se esperaba que los hubiera, respecto a la investigación del asesinato en 2007 del presidente Regional de la Cruz Roja en Puerto Cortés. Carlos Alberto Navas González, el único sospechoso conocido, continuó en prisión cumpliendo otra condena.

Al final del año, cuatro agentes de policía que esperaban su juicio por el homicidio en 2006 de los ambientalistas Heraldo Zúñiga y Roger Murillo, continuaban prófugos después de haber huido de la prisión en 2008.

Al final del año, el fiscal estaba considerando presentar una apelación por el fallo de un tribunal de exonerar a Ítalo Iván Lemus Santos del homicidio en 1988 del ambientalista Carlos Luna.

El 4 de febrero, la Corte Suprema sentenció a Efraín Ordoñez a 32 años de prisión por el secuestro y asesinato en 1997 de Ricardo Ernesto Maduro Andreu.

El 6 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el gobierno era responsable del homicidio cometido en 1995 en Tela de la activista ambientalista Blanca Jeanette Kawas Fernández. La Corte ordenó al gobierno pagar a la familia Kawas una indemnización de \$105,000 dólares estadounidenses dentro del transcurso de un año a partir del fallo. La Corte también ordenó que en el transcurso de dos años después del fallo, el gobierno debería realizar una campaña nacional para crear sensibilidad y consciencia sobre la importancia del trabajo de los ambientalistas y su aporte a la protección de los derechos humanos. Para finales del año, el gobierno no había respondido aún al fallo de la Corte.

El 8 de mayo, la Dirección de Medicina Forense de la Policía Nacional de Honduras (PNH) descubrió los restos de Edwin Palacios, quien fue secuestrado en 2007. El 18 de junio, Elmer Orellano y Alexander Reyes, acusados de haber asesinado a Palacios, junto con otros dos pandilleros, escaparon de la prisión de San Pedro Sula donde estaban recluidos. Al final del año, Orellano, Reyes y los otros dos presos que huyeron continuaban prófugos.

Los delitos violentos continuaron estimulando el crecimiento de servicios de seguridad privada no autorizados y de grupos parapoliciales que presuntamente patrullaban los vecindarios y municipalidades para impedir la delincuencia. Organizaciones de derechos humanos afirmaron que algunos consejos de seguridad ciudadana (grupos de protección de vecindarios), así como compañías de seguridad privada con vínculos con militares o agentes de la policía activos o retirados, actuaban en complicidad con la policía como escuadrones de la muerte, ejercían la ley por cuenta propia, y usaban fuerza letal para eliminar a supuestos delincuentes habituales.

b. Desaparición

Hubo informes de desapariciones por motivos políticos y de otro tipo. Algunas de las desapariciones, que incluyen la desaparición de menores de edad, fueron atribuidas a motivos delictivos, mientras se supuso que otras se trataban de actos voluntarios de personas que abandonaron el país en busca de empleo en el extranjero o para escapar de amenazas de muerte. La policía informó haber investigado 111 casos de secuestros durante el año.

El 31 de marzo, el gobierno anunció trece medidas para combatir los secuestros por rescate; una de éstas era bloquear las llamadas con teléfonos celulares desde las prisiones como una forma de impedir que los reclusos miembros de pandillas organizaran los secuestros. A finales del año, había un programa de bloqueo de teléfonos celulares en operación en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto.

El 15 de marzo, desconocidos secuestraron a Bernardo Rivera Paz, periodista retirado y ex diputado del Partido Liberal. El 9 de julio, las autoridades encontraron sus restos en Florida, departamento de Copán. Al final del año, la investigación seguía en pie.

No se supo de ningún avance en la desaparición en octubre de 2008 de José Alfredo Guevera, Carlos Laxo y Héctor Herrera.

El 1 de septiembre, el Ministerio Público informó que agentes de la estación de policía de La Lima, Cortés, habían usado durante casi un año un vehículo que pertenecía al defensor público Juan Bautista Vargas, quien desapareció en 2008, sin informárselo a sus superiores. A finales del año, se desconocía el paradero de Vargas.

El Programa Nacional de Reparaciones, creado por un decreto del gobierno en 2008, no funcionó durante el año a causa de mandatos judiciales solicitados por particulares que cuestionaron la legalidad del programa. Las impugnaciones se refirieron en especial a la propuesta del pago de reparaciones a la coordinadora de la ONG Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, y al asesor presidencial Milton Jiménez.

El 19 de mayo, un juez ordenó el arresto domiciliario de Alexander Hernández, quien fuera el jefe del Batallón 3-16, a la espera de los resultados de la investigación sobre su presunta participación en la desaparición de Nelson Mackey en 1983. El 2 de julio, el tribunal otorgó sin ninguna explicación la libertad anticipada al ex teniente coronel Wilfredo Leva Cabrera, quien fuera condenado a 80 años de prisión por varios delitos, que incluyen el homicidio de Mackey.

c. Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

Aunque la Constitución y la ley lo prohíben, hubo casos donde la policía y el ejército recurrieron a estas prácticas, entre las que hubo palizas y otros maltratos a detenidos y manifestantes políticos.

Hubo acusaciones contra la policía y el ejército relacionadas con el conflicto político a raíz del golpe de junio por supuestos abusos en el uso de fuerza no letal y graves agresiones físicas contra manifestantes opuestos al golpe de estado.

Algunos ejemplos representativos de estas acusaciones se enumeran a continuación:

La delegación de la CIDH informó que más de 100 personas denunciaron que durante las manifestaciones en contra del golpe la policía usó la fuerza de manera desproporcionada lo cual causó lesiones corporales a los manifestantes. La Policía Nacional de Honduras (PNH) informó que entre el 29 de junio y el 15 de agosto recibió 31 denuncias de personas lesionadas por la policía en manifestaciones políticas.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos en San Pedro Sula informó que entre el 28 de junio y el 11 de octubre radicó cargos en contra de 13 agentes de la policía en cuatro casos relacionados con la detención ilícita y el abuso físico de manifestantes en contra del golpe. Las autoridades emitieron una orden de captura en contra de la agente de policía Delmi Yamileth Martínez por los delitos de detención ilegal con agravante y tortura, por presuntamente haber usado gas pimienta y amenazado con matar a la manifestante Antonia Coello el 12 de agosto en San Pedro Sula. Al final del año la investigación seguía en pie, y Martínez estaba prófuga.

El 30 de julio, un policía golpeó con una porra al candidato presidencial independiente Carlos H. Reyes durante una manifestación en contra del golpe en Tegucigalpa. Reyes se precipitó 4,5 metros desde un muro de retención y se fracturó el brazo. A finales del año, no había información disponible sobre ninguna investigación respecto a este incidente.

El 14 de agosto, cuatro policías supuestamente violaron a una mujer en un lugar remoto después de detenerla por haber participado ese mismo día en una manifestación política contra el golpe en Choloma, departamento de Cortés. La víctima declaró que al menos uno de los agentes dijo que “estaba recibiendo su merecido” por participar en algo en lo que no debería haber participado. Al final del año, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en San Pedro Sula investigaba el incidente.

El 7 de octubre, durante una manifestación política contra el golpe en Tegucigalpa, un miembro de las fuerzas de seguridad supuestamente lesionó a Luis Norales, garífuna de 18 años de edad, a quien golpeó repetidamente en la cabeza, pateó, y disparó con balas de goma. Después de ser hospitalizado por sus lesiones, Norales interpuso una demanda ante el COFADEH. A finales del año, no había información disponible de alguna investigación respecto a este incidente.

Los siguientes casos se iniciaron antes de 2009:

El 9 de septiembre, un tribunal declaró culpables a Marvin Javier Martínez Bermúdez y José Santiago Lopez Villalobo por el asesinato de la Juez Alba Leticia Bueso en 2007. Al final del año, Martínez Bermúdez y López Villalobo seguían en prisión preventiva. No hubo más información sobre el paradero de los otros dos sospechosos, Rubén Antonio Pineda Hernández y Olvin Alexander López Moreno, quienes continuaban prófugos.

Al final del año, un agente de policía había sido acusado por detención ilegal y estaba a la espera de su juicio en un caso de 2007 contra cinco policías por los delitos de tortura y detención ilegal de varios miembros de la ONG Asociación LGTB Arcoíris de Comayagüela.

Condiciones de las prisiones y los centros de detención

Las condiciones en las prisiones fueron duras y la seguridad carcelaria fue deficiente. Sin embargo, hubo algunas mejoras. Grupos de derechos humanos informaron que los prisioneros estuvieron expuestos a condiciones graves de hacinamiento, malnutrición y a servicios sanitarios inadecuados. Varios factores contribuyeron a que el sistema penitenciario fuera peligroso e inestable, como el fácil acceso a armas y otro tipo de contrabando, la impunidad de las agresiones de prisioneros contra reclusos no violentos, la fuga de reclusos y las amenazas de los reclusos y sus cómplices fuera de la prisión a oficiales penitenciarios y a sus familias.

Los reclusos fueron objeto de diferentes tipos de maltrato, como la violación por otros presos. Las autoridades no proporcionaron alimentación adecuada ni otras necesidades básicas. Los prisioneros continuaron fugándose mediante sobornos y otros medios. Organizaciones de derechos humanos informaron que los reclusos eran torturados o sometidos a otro tipo de maltrato cuando eran transportados entre prisiones o centros de detención.

En las instalaciones más grandes de San Pedro Sula, Tamara y Choluteca hubo disturbios, principalmente a causa de las condiciones rigurosas y la violencia entre pandillas. Según informes, entre enero y septiembre supuestamente murieron 30 presos, en la mayoría de los casos debido a la violencia entre pandillas rivales.

Las autoridades de las prisiones intentaron recluir a los presos de pandillas rivales en distintas instalaciones o en diferentes áreas de la misma prisión para así reducir la violencia entre pandillas y la violencia hacia reclusos que no eran miembros de las pandillas.

Personas con enfermedades mentales, así como personas con tuberculosis y otras enfermedades contagiosas, estuvieron recluidas junto con la población general de la prisión. Organizaciones de derechos humanos acusaron a los oficiales de las prisiones de uso excesivo de la fuerza en contra de los reclusos, como palizas, aislamiento y amenazas. Hubo informes de fuentes fidedignas que oficiales de seguridad eran indulgentes en el caso de violaciones y otros abusos físicos a los detenidos homosexuales.

El 19 de enero, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos interpuso ante la Corte Suprema un recurso de habeas corpus a favor de una mujer detenida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social debido a afirmaciones que las custodias de la prisión demostraban tratos inhumanos al castigar a las reclusas. La Corte negó el recurso por falta de pruebas.

El 27 de marzo, las autoridades acusaron a Leonel Ramos Andino y a Luis Trochez Pineda por el delito de abuso de autoridad relacionado con un incidente en 2007 cuando supuestamente estos dos ex directores de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto otorgaron permisos a reclusos para salir por largos períodos de la penitenciaría. A fines del año, no había nuevos adelantos en el caso.

El 20 de abril, reclusos hicieron estallar una granada en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, con el saldo de tres reclusos muertos y 16 heridos. A fines del año, no había nuevos adelantos en el caso.

Varios oficiales de prisiones, entre los que están Wilfredo Maradiaga Oseguera y Aldo Rodolfo Oliva Rodríguez, fueron investigados por abuso de autoridad y otorgar a los reclusos permisos ilegales de salida. A fines del año, no había nuevos adelantos en la investigación.

Hay un centro de detención para menores en Támara, operado bajo la supervisión del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Durante el año, en el centro de detención en Támara hubo 76 reclusos y 21 reclusas menores de edad.

Las mujeres generalmente estuvieron reclusas en instalaciones diferentes a las de los hombres con condiciones similares pero, a diferencia de los hombres, no se les dio acceso a visitas conyugales. En ciertas prisiones de baja seguridad, las mujeres fueron reclusas con la población general. A los niños menores de dos años se les permitió estar con sus madres en la prisión. Los reclusos en prisión preventiva estaban junto con los condenados. En algunos casos, menores de edad estuvieron reclusos junto con los adultos.

El hacinamiento en las prisiones continuó siendo un problema. Ante la falta de otros programas educativos o correccionales, los jueces tuvieron la tendencia de recluir a menores de edad en los centros de detención. En general, el gobierno permitió a observadores de derechos humanos locales e internacionales visitar las prisiones durante el transcurso del año. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visitó las prisiones y cárceles a lo largo del año. Estas visitas se llevaron a cabo de conformidad con los procedimientos y prácticas del CICR.

En 2008, el Ministerio de Seguridad realizó un importante programa de reforma a las prisiones, que incluyó la construcción de nuevas instalaciones para reducir el hacinamiento, separar a los reclusos más peligrosos de los delincuentes no violentos, y promover la rehabilitación. Las autoridades trasladaron a 400 presos de una instalación que tenía capacidad para 90 reclusos a una nueva prisión en Juticalpa, Olancho, con capacidad para 600 reclusos. La Oficina del Director de la Penitenciaría Nacional Femenina desarrolló en 2008 un moderno sistema para la clasificación y evaluación de reclusas, y utilizó apoyo de ONG para programas de rehabilitación y educación. Según se informó, las reformas redujeron la violencia dentro de la penitenciaría femenina.

d. Arresto o detención arbitraria

La Constitución y la ley prohíben las detenciones y los arrestos arbitrarios; sin embargo en ocasiones las autoridades no implementaron dichas prohibiciones eficazmente. A veces, la policía arrestó a personas basándose en factores como la manera en que iban vestidas, el tipo de tatuajes que tenían, y sus creencias políticas.

Hubo acusaciones de supuestos arrestos y detenciones arbitrarios relacionados con el golpe de junio. Entre el 28 de junio y octubre, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en San Pedro

Sula levantó cargos en contra de agentes de la policía en cuatro casos por los delitos de detención ilegal, abuso y, en un caso, tortura.

El 30 de junio, el régimen de facto instituyó el decreto 011-2009, el cual establece el horario del toque de queda; restringe sustancialmente la libertad de reunión, asociación y circulación; y permite a la policía arrestar y detener durante 24 horas a las personas que se encuentren en lugares públicos y a registrar sus viviendas sin una orden de allanamiento. El 26 de septiembre, el régimen de facto promulgó el decreto 016-2009, que restringe sustancialmente la libertad de expresión, reunión y circulación. El 17 de octubre, el régimen de facto abrogó el decreto 016-2009. A final del año, el decreto 011-2009 continuaba en vigor.

Durante su visita del 17 al 21 de agosto, la delegación de la CIDH encontró varios abusos a los derechos humanos, que incluían detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. La delegación reportó que recibió información donde se afirmaba que entre el 28 de junio y el 21 de agosto las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente entre 3,500 y 4,000 personas durante las manifestaciones en contra del golpe de estado. La Policía Nacional de Honduras (PNH) informó que entre el 29 de junio y el 15 de agosto había arrestado a 213 personas por delitos cometidos durante las manifestaciones políticas y que 37 de los arrestados fueron acusados formalmente por diferentes infracciones, que incluyeron sedición, terrorismo, manifestación ilícita y vandalismo.

La PNH informó que entre el 29 de junio y el 1 de agosto arrestó a 3,430 personas por violar el toque de queda. Aunque algunas personas fueron acusadas de realizar actos de vandalismo, se informó que en muchos casos las fuerzas de seguridad no cumplieron con las garantías procesales y realizaron arrestos sin causa probable. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos informaron que algunos agentes les dijeron a los detenidos que habían sido arrestados y detenidos por su opinión política.

El 11 de septiembre, las autoridades arrestaron en La Ceiba al candidato a diputado René Chávez, supuestamente por participar en protestas en contra del golpe, y lo acusaron de sedición. Unos días después, un juez desestimó todos los cargos y liberó a Chávez.

El 22 de septiembre, se informó que las fuerzas de seguridad arrestaron cerca de la Embajada de Brasil a alrededor de 150 manifestantes en contra del golpe por violar un toque de queda, y los detuvieron en el estadio Chochi Sosa en Tegucigalpa. Sin embargo, los registros de la policía no mostraban que ninguna de las personas detenidas en el estadio hubieran sido arrestadas formalmente, y todos los detenidos fueron liberados antes de cumplirse las 24 horas de su arresto.

No hubo ningún avance en la investigación de la detención ilegal en septiembre de 2008 de Mario Álvarez, Nelson Álvarez, Heliodoro Amador y Alonso Andino, activistas por los derechos de la tenencia de la tierra de la empresa asociativa campesina Unión y Fuerza, en la aldea de Suntule, en el departamento Francisco Morazán.

Función de la policía y del aparato de seguridad

El Ministerio de Seguridad supervisa las operaciones de la policía, que incluyen a la PNH, la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), la Policía de Tránsito, la Policía de Fronteras, la Policía de Turismo, y la Policía Penitenciaria. La corrupción y la impunidad fueron graves problemas dentro de las fuerzas de seguridad.

La Oficina de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad está a cargo de investigar las acusaciones de actividades ilegales cometidas por miembros de la policía. Sin embargo, la eficacia de Asuntos Internos en acreditar a los agentes se vio sumamente obstaculizada después del golpe de junio. Tanto la PNH como la DGIC tienen una oficina de responsabilidad profesional que hace revisiones internas de mala conducta policial.

El 23 de julio el régimen de facto implementó el decreto ejecutivo 001-2009, que estuvo en vigor hasta el final del año. En éste se dicta que el Ministerio de Defensa, el ejército, todo su personal y todos sus recursos deben ayudar a la PNH a prevenir, controlar y luchar contra la delincuencia, incluida la detención de manifestantes que cometen actos ilegales, según lo determine y ordene un fiscal o juez, con la intención de proteger a individuos o bienes. Al Ministerio Público le ha sido difícil investigar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, ya que en muchos casos se le asignó a la policía la tarea de investigar delitos que cometieron sus compañeros.

Al final del año no había información sobre la investigación de un incidente en septiembre de 2008 donde dos agentes de la policía vestidos de civil se habían infiltrado en una reunión del sindicato de la Universidad Autónoma de Honduras y llevaban consigo una lista de líderes de la sociedad civil identificados como “peligrosos”. En la lista estaba el nombre tachado de la dirigente sindical Altagracia Fuentes, quien murió asesinada, y tenía escrita la palabra “muerta” junto a su nombre (véase la sección 7.a).

Durante el año, la Academia Nacional de Policía ofreció 60 horas de capacitación en derechos humanos para todos los agentes de policía activos. Antes del golpe de junio, el Ministerio de Seguridad coordinaba con los grupos de la sociedad civil para capacitar a los agentes de la policía y de las penitenciarías en derechos humanos. No hubo información disponible sobre la capacitación policial después del golpe de junio.

La intimidación y la violencia de las pandillas, especialmente en el transporte público, continuó siendo un grave problema, por lo que el gobierno asignó a agentes de seguridad en muchos autobuses públicos. En algunas ocasiones, los policías se concentraron específicamente en jóvenes y menores, a quienes mataron con frecuencia impunemente.

Procedimientos para arrestos y trato durante la detención

Antes del golpe de junio, la ley establecía que la policía sólo podía arrestar a una persona con una orden judicial, a menos que el arresto fuera por orden de un fiscal, se realizara mientras se estaba perpetrando un delito, se realizara cuando existieran fuertes sospechas de que la persona había cometido un delito e intentaría evitar ser procesada, o se realizara cuando la persona fuera encontrada con pruebas de un delito. La ley antes del golpe requería que la policía informara a la persona de los motivos de su arresto y que la persona detenida fuera llevada ante la autoridad competente dentro de las siguientes 24 horas. El fiscal tenía 24 horas para decidir si había causa

probable para formular una acusación formal, y el juez tenía entonces 24 horas para decidir si emitir un orden de detención temporal que podía durar hasta seis días; para entonces, el juez debía celebrar una audiencia previa al juicio para examinar la causa probable y decidir si la detención preventiva debía continuar. La ley establecía el derecho a fianza para las personas acusadas de delitos graves y el derecho de los presos a tener acceso inmediato a sus familiares. Aunque la ley también establecía el derecho de los presos a tener acceso inmediato al abogado de su elección y, en caso de ser indigente, a contar con un abogado de oficio, estas garantías no siempre se cumplían.

El 30 de junio, el régimen de facto promulgó el decreto 011-2009 que suspende varios derechos civiles durante las horas del toque de queda y permite a la policía arrestar y detener durante 24 horas a las personas que se encuentren en lugares públicos después del toque de queda. El 26 de septiembre, el régimen de facto promulgó el decreto 016-2009, que permite la detención de personas que violen el toque de queda o a quienes la policía o el ejército sospechen que hayan lesionado a personas, dañado bienes o que se hayan reunido para planear actividades ilícitas (véase la sección 1.d).

La detención preventiva prolongada fue un problema grave. La ley ordena la liberación de todo detenido cuyo caso no haya sido llevado a juicio y que haya permanecido en detención por un tiempo que exceda el de la condena máxima en prisión por el delito que se le imputa. La corrupción e ineficiencia judicial y la falta de recursos retrasaron los procesos en el sistema de justicia penal.

Debido a los retrasos en los juicios, muchas personas en detención preventiva ya habían permanecido en prisión el tiempo equivalente al máximo permitido por el delito que se les imputaba. Muchos presos permanecieron en la cárcel después de haber sido exonerados o de haber completado su condena porque los funcionarios no habían procesado su liberación.

e. Negación de un juicio público justo

Aunque la Constitución y la ley disponen un poder judicial independiente, el sistema de justicia no contó con fondos ni personal suficiente, no tuvo el equipo adecuado, frecuentemente fue ineficaz y vulnerable al padrinazgo, la corrupción y las influencias políticas. Los bajos salarios y la falta de controles internos contribuyeron a que los funcionarios judiciales fueran vulnerables a los sobornos y grupos de presión poderosos influyeron en el resultado de los procesos judiciales.

El sistema judicial penal está conformado por 12 cortes de apelación, 77 tribunales de primera instancia de jurisdicción general y 330 juzgados de paz de jurisdicción limitada. La Corte Suprema de Justicia nombra a todos los jueces de los tribunales inferiores.

Presuntamente, los jueces estuvieron sujetos a castigos administrativos, que incluían la pérdida de salario y el cambio de su puesto a causa de su postura política y resoluciones legales. El 16 de agosto, Maritza Arita, jueza del tribunal penal en Tegucigalpa, informó que sus supervisores le ordenaron tomarse 15 días de vacaciones sin goce de salario que no había solicitado después de haberle concedido libertad provisional a tres manifestantes que habían sido arrestados por vandalismo y terrorismo durante una manifestación en contra del golpe en agosto. En

septiembre, las autoridades transfirieron a Arita al tribunal civil y supuestamente recibió amenazas de muerte relacionadas con su decisión de otorgar la libertad provisional en agosto.

Procedimientos judiciales

La ley estipula el derecho a tener un juicio público justo, permite que los acusados confronten o interroguen a los testigos, presenten testigos y pruebas a su favor, y da acceso a los acusados a las pruebas que tenga el gobierno en su caso. Aunque la ley asume que el acusado es inocente y que tiene derecho a una audiencia inicial ante un juez, a la fianza, a consultar con un abogado de manera oportuna, a que el estado le proporcione un abogado de oficio de ser necesario, y el derecho a la apelación, estos derechos con frecuencia no fueron respetados.

La ley prohíbe que los casos procedan cuando el sospechoso carece de representación legal pero el gobierno asignó recursos mínimos a los fiscales. En consecuencia, el abogado de oficio no pudo satisfacer la demanda de asistencia legal de las personas que no tenían recursos para pagar por su representación legal.

A lo largo del año, algunas de las objeciones más comunes durante los procesamientos penales fueron la falta de credibilidad de las pruebas presentadas por la fiscalía, la falta de protección a los testigos, la desconfianza generalizada del público del sistema legal y la corrupción judicial.

El 28 de junio, oficiales militares y policías ejecutaron una orden de captura sellada que fue emitida por la Corte Suprema en contra del presidente Zelaya, donde se ordenaba que el presidente fuera detenido y llevado ante un juez. Sin embargo, los militares obligaron al presidente a abordar un avión y fue exiliado sin tener derecho a un juicio público o defenderse a sí mismo. El 29 de junio, el régimen de facto expulsó del país a la Ministra de Relaciones Exteriores Patricia Rodas (véase la sección 2.d).

Presos y detenidos por motivos políticos

Hubo informes de detenciones arbitrarias por motivos políticos después del golpe de junio. Al finalizar el año no había información sobre el número de detenidos políticos o si el régimen de facto permitía regularmente el acceso a las organizaciones humanitarias internacionales para visitar a los detenidos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Existe una judicatura independiente e imparcial para asuntos civiles, que incluye el acceso a un tribunal para reclamar daños y perjuicios para la cesación de la violación de los derechos humanos. El litigante puede presentar dichas acusaciones cuando el tribunal penal determina que es posible solicitar compensación por daños y perjuicios.

f. Interferencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia.

La Constitución y la ley prohíben esos actos pero existe una excepción legal que permite entrar a una residencia privada en cualquier momento en caso de una emergencia o para evitar que se

cometa un delito. Continuaron las acusaciones de fuentes fidedignas de que la policía ocasionalmente no obtenía la autorización requerida antes de entrar a una casa privada.

El 30 de junio, el régimen de facto promulgó el decreto 011-2009, que permite a la policía registrar casas durante el toque de queda sin tener una orden judicial, y el 26 de septiembre promulgó el decreto 016-2009, que también limita el derecho a la privacidad (véase la sección 1.d).

El 13 de julio, la diputada del Partido Liberal Margarita Zelaya informó que oficiales militares ingresaron a su hogar sin una orden de allanamiento. Zelaya sostuvo que el régimen de facto realizó este acto para intimidarla, ya que es prima del presidente Zelaya. A fines del año, no había nuevos adelantos respecto a una investigación.

Líderes garífunas y otros líderes de minorías étnicas siguieron denunciando la falta de reparación del gobierno de acciones previas de las fuerzas de seguridad privadas y públicas por las que desalojaron a agricultores y grupos indígenas que reclamaban ser dueños de sus tierras en virtud de las leyes de la reforma agraria o de títulos de propiedad ancestrales (véase la sección 6).

Sección 2. Respeto por las libertades civiles:

a. Libertad de expresión y prensa

La Constitución y la ley establecen la libertad de expresión y de prensa, en general. Sin embargo, en especial después del golpe de junio, hubo informes de intimidación de periodistas por el gobierno, de la toma del gobierno de frecuencias de transmisión de televisión y de la autocensura periodística.

Después del golpe de junio, el régimen de facto usó decretos y otras medidas para restringir la libertad de expresión. La CIDH informó que mediante estas medidas, el régimen de facto limitó gravemente la libertad de expresión, lo cual generó una atmósfera de intimidación. Aunque no hubo ningún informe de que se prohibiera a los medios de comunicación internacionales operar libremente, los canales internacionales de noticias que usaban proveedores de servicio de cable experimentaron interrupciones en sus transmisiones después del golpe de junio, en particular cuando transmitían comunicaciones del presidente Zelaya o de miembros de su gobierno.

Un pequeño número de poderosos magnates empresariales que comparten estrechos vínculos comerciales, políticos y familiares son dueños de la mayor parte de los medios de noticias del país. El gobierno y, después del golpe de junio, el régimen de facto influyeron en la cobertura de los medios de comunicación al otorgar o negar el acceso a funcionarios del gobierno; esto creó vínculos entre los medios y el sistema político, y aumentó la influencia de los dueños de la prensa en los programas de noticias y las decisiones políticas.

El 1 de febrero, la policía detuvo al reportero del periódico *La Tribuna* después de que tomara fotografías de un accidente automovilístico. El 27 de mayo, un juez emitió órdenes de captura contra los agentes de la DGIC Dora Elvira Rivera Zúñiga, Leonardo Ferrufino y Walter Castellanos acusándolos de los delitos de detención ilegal y abuso de autoridad en la detención

de Ramírez. Los tres agentes fueron liberados bajo fianza y a finales del año estaban a la espera de su juicio.

El 31 de marzo, desconocidos en San Pedro Sula dispararon de muerte al corresponsal de Radio Cadena Voces, Rafael Munguía, mientras se encontraba en su automóvil. Organizaciones de derechos humanos sostuvieron que fue asesinado por sus reportajes sobre las pandillas y el crimen organizado. Al final del año, la investigación seguía en pie.

El 12 de abril, desconocidos intentaron asesinar a Carlos Roberto Chinchilla, reportero y propietario de la estación Telemaya Canal 12, cerca de San Nicolás, Copán. En 2008, hombres armados y enmascarados amenazaron de muerte a Chinchilla y a su camarógrafo Marlon Dubon, advirtiéndoles que si no se iban de San Nicolás los matarían. Al final del año, la investigación seguía en pie.

Después del golpe de junio, hubo actos de violencia y otras formas de intimidación en contra de periodistas y medios de comunicación, como los siguientes:

El 28 de junio, el ejército ingresó a las oficinas de Cable Color, Canal 8, las estaciones de televisión de Canal 11 y Canal 36, y las estaciones radiales Radio Progreso y Radio Globo, y censuró o bloqueó sus transmisiones. La mayoría de estas estaciones pudieron empezar a transmitir de nuevo entre tres y cuatro días después. Desconocidos amenazaron a Radio Globo, y el 23 de agosto individuos enmascarados vertieron un producto químico corrosivo sobre el equipo de transmisión de Radio Globo y Canal 36. El 28 de septiembre, el régimen de facto ordenó el cierre de Radio Globo y Canal 36, en conformidad con el decreto 016-2009 que suspendía la libertad de expresión y otras libertades civiles. Las fuerzas de seguridad confiscaron y dañaron el equipo de transmisión y otros equipos en ambas estaciones. El 17 de octubre, se permitió la reapertura de Radio Globo y el Canal 36, después que el régimen de facto abrogara el decreto 016-2009 (véase la sección 1.d). Una investigación del Ministerio Público respecto a la legalidad del decreto y de las acciones de las fuerzas de seguridad contra Radio Globo seguía pendiente al final del año.

El 30 de junio, desconocidos lanzaron una granada en las oficinas de Radio América en Tegucigalpa. El 8 y 16 de julio y el 31 de agosto, desconocidos cortaron los cables de transmisión de Radio América en Tegucigalpa, Marcala y Olanchito.

El 3 de julio, dos agresores enmascarados en el departamento de Atlántida asesinaron a tiros al periodista de radio Gabriel Fino Noriega. El 22 de julio, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos informó que el asesinato no estaba relacionado con el desorden político que surgió después del golpe. Sin embargo, ONG de derechos humanos sostuvieron que antes de su homicidio, Fino había recibido amenazas de muerte por cubrir actividades en contra del golpe. Al finalizar el año, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos estaba realizando una investigación.

El 4 de julio, desconocidos lanzaron granadas en la oficina del Canal 11 y el periódico nacional *El Tiempo* en San Pedro Sula. El 5 de julio y el 12 de septiembre, desconocidos lanzaron

artefactos incendiarios en las oficinas del Canal 11. El 4 de noviembre, desconocidos lanzaron una granada al techo del edificio de la radio HRN. Un periodista resultó herido en la explosión.

En julio, Carlos Mauricio Flores, uno de los editores del periódico *El Herald* que diseminó reportajes de apoyo al régimen de facto, recibió una amenaza de muerte en un mensaje de texto. El 15 de agosto, atacantes no identificados lanzaron cinco bombas molotov a la oficina de *El Herald* en Tegucigalpa. No hubo información disponible respecto a alguna investigación sobre estos incidentes.

El 5 de octubre, el régimen de facto publicó el acuerdo ejecutivo 124-2009, que permite a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) revocar o cancelar los permisos o licencias de los medios que transmitan mensajes que fomenten el odio nacional, los daños a la propiedad o la anarquía social contra el estado democrático. Al final del año, el decreto 124-2009 continuaba en vigor.

El 5 de diciembre, dos personas enmascaradas entraron al café Internet donde el periódico *El Libertador* operaba temporalmente en Tegucigalpa, amenazaron a los empleados con armas de fuego, y se llevaron una computadora y una cámara. No hubo información disponible respecto a alguna investigación sobre este incidente.

El 9 de diciembre, la CIDH expresó su “gran preocupación sobre las interferencias constantes en la transmisión” del Canal 36 durante su noticiero principal, y notó que se trataba de la sexta ocasión en que la Comisión denunciaba públicamente los “diferentes ataques contra los periodistas y los medios” en el país.

El 15 de diciembre, desconocidos dispararon al automóvil de Karol Cabrera, periodista a favor del golpe; en el ataque murieron Catherine, su hija de 16 años que estaba embarazada, quien la acompañaba, y su hijo nonato. A finales del año, las autoridades realizaban una investigación sobre el incidente.

El 15 de diciembre, el Fiscal Especial de Derechos Humanos formuló una acusación formal ante la Corte Suprema contra el presidente de CONATEL del régimen de facto, Miguel Rodas, y otros funcionarios, por el delito de abuso de autoridad por el cierre forzoso del Canal 36 y Radio Globo. A fines de año continuaban las diligencias del caso. Durante el resto del año, una interferencia de origen desconocido siguió afectando la señal del Canal 36.

Antes del golpe de junio, el gobierno entregaba cantidades importantes de dinero a ciertos miembros de los medios de comunicación que cubrían sus reportajes en la forma que se les solicitaba hacerlo. Según informes, el régimen de facto continuó con esta práctica. El gobierno ejerció una influencia considerable en los medios escritos al otorgar o retener los anuncios publicitarios oficiales, que están financiados con fondos públicos.

Los medios noticiosos continuaron sujetos a la venalidad, la politización e influencias externas. Según las ONG, funcionarios de alto nivel obtuvieron el silencio de la prensa mediante la contratación altamente remunerada de periodistas como asistentes de asuntos públicos, además del pago a periodistas para que investigaran o suprimieran reportajes de noticias.

Algunos miembros de los medios de comunicación afirmaron que cuando intentaron profundizar en sus reportajes sobre los políticos del país o la corrupción oficial, en ocasiones el gobierno —y después del golpe de junio, el régimen de facto— les negó el acceso a la información.

El 9 de junio, un tribunal liberó a Germán David Almendarez debido a no tener pruebas suficientes en su contra. Almendarez estuvo preso durante 11 meses acusado de la muerte del periodista Carlos Salgado de Radio Cadena Voces, en 2007.

El 12 de febrero, un tribunal condenó a Walter Urbina y a Edgardo Zúñiga a 17 años de prisión por su papel en la muerte del periodista Arístides Soto en 2001.

Libertad de uso de Internet

Antes del golpe de junio, no había restricciones gubernamentales al acceso a Internet ni informes de que el gobierno monitoreara el correo electrónico o las salas virtuales de conversación (*chat rooms*) en Internet. En general, individuos y grupos podían participar en la expresión pacífica de sus opiniones en Internet, incluso por correo electrónico. Después del golpe de junio, Radio Globo informó que su sitio Web fue desconectado en varias ocasiones. Hubo aproximadamente nueve usuarios de Internet por cada 1.000 habitantes, y la falta de infraestructura en las zonas rurales limitó en gran medida el acceso para muchas personas.

Libertad académica y actos culturales

El gobierno no impuso limitaciones a la libertad académica ni a los actos culturales.

b. Libertad de reunión y asociación pacíficas

Libertad de reunión

La Constitución y la ley establecen la libertad de reunión, y el gobierno del presidente Zelaya generalmente respetó este derecho.

El régimen de facto promulgó los decretos 001-2009 y 016-2009, con el efecto de restringir sustancialmente el derecho a la reunión pacífica, a la asociación y la circulación (véase la sección 1.d). Las organizaciones internacionales de derechos humanos afirmaron que ambos decretos violaban la constitución.

Aunque la mayoría de las manifestaciones políticas después del golpe de junio supuestamente fueron pacíficas, algunas manifestaciones concluyeron con violencia. La PNH declaró que entre el 29 de junio y el 15 de agosto, 11 agentes de la policía y 18 militares fueron lesionados en confrontaciones con manifestantes opositores al golpe. En las manifestaciones se arrojaron piedras, se quemaron neumáticos y hubo vandalismo en negocios. Entre los actos de violencia general después del golpe de junio, estuvo la detonación de pequeños artefactos explosivos en el colegio de abogados y en las sedes del Partido Liberal y del movimiento a favor de Zelaya, Bloque Popular.

Se registraron varios casos donde el régimen de facto utilizó fuerza excesiva para impedir la libertad de reunión pacífica. Por ejemplo, ONG sostuvieron que durante una manifestación en contra del golpe el 24 de julio en el cruce fronterizo de Las Manos, las fuerzas de seguridad hicieron uso desproporcionado de la fuerza para reprimir la protesta. Herman Valladares denunció a la delegación de la CIDH que la policía lo agredió físicamente mientras estaba protestando pacíficamente en la manifestación de Las Manos. A fines del año, no había nuevos adelantos respecto a una investigación.

El 12 de agosto, manifestantes en contra del golpe patearon, empujaron al piso y agredieron verbalmente al Tercer Vice Presidente del Congreso Nacional (a favor del golpe), Ramón Velázquez Nazar, cuando salía del Congreso. Durante enfrentamientos subsecuentes entre la policía y manifestantes ese mismo día, el Congresista en contra del golpe Marvin Ponce resultó con el brazo fracturado.

El 21 de septiembre, fuerzas militares y de la PNH supuestamente lesionaron a 30 manifestantes al retirar por la fuerza a entre 500 y 1,000 manifestantes en contra del golpe frente a la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde el presidente Zelaya se había refugiado. El 22 de septiembre, la CIDH declaró que “condenaba firmemente el uso excesivo de la fuerza en la represión de las protestas” en las cercanías de la embajada.

Libertad de asociación

La Constitución y la ley establecían la libertad de asociación de manera general, y antes del golpe de junio el gobierno del presidente Zelaya generalmente respetaba este derecho en la práctica. Sin embargo, la ley de asociación ilícita la prohíbe y la sanciona con penas de tres a 12 años prisión. Durante varios años, organizaciones de derechos humanos criticaron la ley y su implementación como una restricción indebida del derecho de libre asociación. Grupos de defensa defensores de los derechos de homosexuales expresaron su preocupación de que la ley pudiera usarse para penalizar a las organizaciones y las actividades sociales de la comunidad de esta minoría sexual. El gobierno usó las reformas al código penal que proscriben la asociación ilícita para arrestar y quitarle sus tierras a supuestos miembros de pandillas, agricultores y personas de las comunidades indígenas.

El decreto 011-2009 suspende la libertad de asociación durante las horas del toque de queda e impone la pena de arresto. El decreto 016-2009, implementado el 17 de septiembre, restringió marcadamente la libertad de reunión (véase la sección 1.d).

c. Libertad de culto

La Constitución establece la libertad de culto y, en general, el gobierno respetó este derecho en la práctica. El gobierno requiere que los misioneros extranjeros obtengan permisos de entrada y residencia.

Abusos y discriminación en grupos sociales

Hubo informes de abuso y discriminación de grupos religiosos, que incluyeron actos antisemitas. El 4 de julio, el cardenal de la iglesia católica Óscar Rodríguez denunció que tras haber sugerido públicamente que el golpe de junio era una transferencia de poder constitucional, desconocidos lo amenazaron de muerte y amenazaron con quemar la catedral de Tegucigalpa. Manifestantes pintaron graffiti político en las paredes de edificios propiedad de la iglesia. El obispo auxiliar Juan José Pineda Fasquelle informó que después de que la Conferencia de Obispos Católicos emitió una carta pastoral el 4 de julio sobre el golpe de junio, recibió 47 amenazas de muerte.

El 25 de septiembre, el periodista David Romero afirmó en una transmisión de Radio Globo que Israel y los judíos habían apoyado el golpe y que se debía haber permitido que Hitler “hubiese terminado su visión histórica”. Posteriormente, Romero dijo a los medios de comunicación que sus comentarios fueron un error, que no reflejaban su opinión real y que su abuelo era judío. El propietario de Radio Globo, Alejandro Villatoro, declaró que no tomaría ninguna acción contra Romero respecto a las declaraciones antisemitas porque no había ninguna ley para castigar esos comentarios. El presidente Zelaya declaró públicamente su respeto por todas las religiones. El régimen de facto no hizo ninguna declaración respecto a los comentarios de Romero. En respuesta a la preocupación sobre la seguridad de sus miembros, la comunidad judía —de aproximadamente 1.000 personas— construyó un muro de protección alrededor de la sinagoga de San Pedro Sula.

Para un análisis más detallado, véase el informe internacional sobre la libertad de culto de 2009 (*2009 International Religious Freedom Report*) en www.state.gov/g/drl/rls/irf/.

- d. Libertad de circulación, personas desplazadas internamente, protección de los refugiados y personas apátridas.

La Constitución establece la libertad de circulación dentro del país, así como para los viajes al extranjero y la emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respetó esos derechos en la práctica. El régimen de facto implementó varios decretos que limitaron la circulación dentro del país.

Antes del golpe de junio, el gobierno cooperaba con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para dar protección y asistencia a personas desplazadas internamente, refugiados, refugiados que retornaron a su país de procedencia, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas de la competencia de la ACNUR. No hubo información disponible sobre la cooperación del régimen de facto con la ACNUR.

La Constitución prohíbe el exilio forzado. El 28 de junio, el ejército sacó al presidente Zelaya de su casa y lo obligó a exiliarse en Costa Rica. El 29 de junio, el ejército obligó a la Ministra de Relaciones Exteriores a abordar un avión y la transportó para exiliarla en México.

El 5 de julio, el presidente Zelaya intentó regresar al país por vía aérea; sin embargo, el ejército colocó obstáculos en la pista del aeropuerto Toncontín que impidieron el aterrizaje.

El 24 de julio, el ejército estableció aproximadamente 20 puntos de control entre la ciudad de El Paraíso y el cruce de la frontera con Nicaragua de Las Manos, y supuestamente prohibió que los manifestantes abandonaran la zona fronteriza durante un toque de queda de 24 horas.

Protección de los refugiados

El país forma parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967. Sus leyes contienen disposiciones para la concesión de asilo o la condición de refugiado, y antes del golpe de junio el gobierno había establecido un sistema para ofrecer protección a los refugiados. En la práctica, el gobierno del presidente Zelaya otorgó protección contra la expulsión o la repatriación de refugiados a países donde su vida o libertad peligrarían debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social específico, u opinión política.

Al final del año, no había información disponible sobre la detención en noviembre de 2008 de ocho ciudadanos sudafricanos que portaban pasaportes falsos y posteriormente solicitaron asilo.

Sección 3. Respeto a los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno

La Constitución y la ley establecen el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno pacíficamente. Antes del golpe de junio, los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica, mediante elecciones periódicas, libres y justas, celebradas conforme al sufragio casi universal. La ley no autoriza el voto a los miembros activos del clero y de las fuerzas de seguridad militares y civiles. El 28 de junio, oficiales militares y policías ejecutaron una orden de captura sellada en contra del presidente Zelaya, donde se ordenaba la detención del presidente. Militares y agentes de la policía obligaron al presidente a abordar un avión y lo exiliaron sin tener derecho a un juicio público o a defenderse a sí mismo. El 28 de junio, el Congreso nombró como el nuevo dirigente del país al presidente del Congreso Roberto Micheletti. La acción del Congreso se basó en una carta de renuncia del presidente Zelaya que éste negó haber firmado.

Elecciones y participación política

El 29 de noviembre, el electorado eligió presidente a Porfirio Lobo, del Partido Nacional, por un periodo de cuatro años. Los observadores internacionales calificaron a estas elecciones en general como libres y justas. Las fuerzas de seguridad sofocaron una manifestación en contra del golpe el 29 de noviembre, pero no se informó que haya habido violencia generalizada, que no se haya permitido votar al electorado o que haya habido intimidación.

Hubo informes sobre algunos casos de violencia durante las semanas previas a las elecciones de noviembre. Por ejemplo, el 6 de septiembre, las fuerzas de seguridad informaron que algunas personas fueron detenidas o lesionadas en una protesta durante la aparición en público del candidato presidencial del partido liberal, Elvin Santos. Sin embargo, los candidatos presidenciales pudieron en general realizar sus campañas libremente.

Los partidos políticos pudieron funcionar sin restricciones ni injerencias externas. Las mujeres participaron activamente en la política. Las mujeres ocuparon 31 de los 128 escaños del

Congreso Nacional. Veintisiete mujeres fueron diputadas suplentes. Hubo cinco mujeres en la Junta Directiva del Congreso, la cual tiene 13 integrantes, y 16 mujeres presidieron comités del Congreso. Antes del golpe de junio, tres mujeres ejercieron como secretarías de estado; 10 mujeres ocuparon puestos como ministras, directoras o representantes de departamentos en el nivel directivo; una mujer fue Comisionada General de la Policía; y cinco mujeres fueron embajadoras.

El Congreso Nacional tuvo dos miembros garífunas y uno lenca.

Durante el mes que precedió el golpe de junio, hubo gran controversia sobre la legalidad de una encuesta de opinión pública propuesta por el Ejecutivo en la que se preguntaría sobre la posibilidad de instalar una urna adicional en las elecciones generales para consultar sobre el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. Algunos grupos consideraban que la Asamblea Constituyente era inconstitucional, y que se trataba de un medio para que el presidente Zelaya eliminara el límite de periodos de gobierno permitido por la Constitución y así poder mantenerse en el poder más allá de su cuarto mandato como presidente. El 28 de mayo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos denunció públicamente esfuerzos del poder ejecutivo de obligar a todos los empleados públicos a recopilar 40 firmas a favor de la encuesta de opinión pública. Además, el 28 de mayo un juez del juzgado de lo contencioso administrativo abrogó el decreto del presidente que ordenaba la encuesta pública de opinión del 28 de junio. El juez indicó a todas las dependencias gubernamentales que suspendieran toda la publicidad y todas las actividades logísticas relacionadas con la encuesta. Esta decisión fue sostenida por la resolución de una corte de apelaciones el 16 de junio y por el Supremo Electoral Tribunal el 25 de junio.

Sección 4 Corrupción oficial y transparencia del gobierno

La ley dispone la imposición de sanciones penales por corrupción oficial; sin embargo, el Gobierno del presidente Zelaya no implementó la ley de forma eficaz y los funcionarios practicaban la corrupción con impunidad. Los indicadores de gobernanza del Banco Mundial señalaron que la corrupción en el gobierno era un problema grave. Las instituciones gubernamentales eran vulnerables a la corrupción y las influencias políticas.

Había una percepción generalizada de que las instituciones anticorrupción del país no habían tomado los pasos necesarios para combatir la corrupción y carecían de la capacidad profesional para investigar, arrestar y procesar a los partícipes de la corrupción de alto nivel, o no estaban dispuestas a hacerlo. La ley dispone la imposición de sanciones penales por corrupción oficial; sin embargo, el Gobierno del presidente Zelaya no implementó la ley de forma eficaz y los funcionarios practicaban la corrupción con impunidad.

Después del golpe de junio, el régimen de facto intentó activamente levantar cargos por corrupción contra el presidente Zelaya y miembros de su administración. No hubo información disponible sobre la situación de la corrupción durante el tiempo del régimen de facto.

Las personas dedicadas a detectar la corrupción fueron intimidadas. El 6 de abril, la CIDH solicitó que el gobierno tomara todas las medidas necesarias para proteger la vida de Inés Yadira

Cubero González, víctima de un atentado con arma de fuego el 16 de marzo, presuntamente debido a su labor como presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Pedro Sula. La CIDH hizo la solicitud porque el gobierno no había proporcionado protección a Cubero González, incluso después de que ella la había solicitado y había denunciado el incidente del 16 de marzo ante la Fiscalía.

El 2 de julio, las autoridades arrestaron a Marcelo Chimirri, el ex gerente de Hondutel, la compañía telefónica propiedad del estado, acusado por el delito de malversación de fondos relacionados con presuntos sobornos pagados a funcionarios de Hondutel. El 22 de agosto, las autoridades acusaron de corrupción al auditor de Hondutel, José Daniel Flores. A finales del año, los casos contra Chimirri y Flores seguían en pie.

El 5 de julio, el Ministerio Público emitió una orden de captura contra el secretario de la presidencia durante la administración de Zelaya, Enrique Flores Lanza, acusado de abuso de autoridad por haber retirado del Banco Central 40 millones de Lempiras (\$2 millones) el 24 de junio presuntamente. El 5 de julio, el Ministerio Público emitió una orden de captura contra Edwin Araque, Presidente del Banco Central durante la presidencia de Zelaya, por haber usurpado un puesto público en relación al presunto retiro de fondos hecho por Flores Lanza el 24 de junio.

El 22 de julio, un juez emitió órdenes de captura en contra del ex vicepresidente ejecutivo Arístides Mejía, la ex Ministra de Finanzas Rebeca Santos y la ex Gerenta de la Compañía de Energía del estado, Rixi Ramona Moncada Godoy, funcionarios del gobierno de Zelaya. Los tres fueron acusados del delito de abuso de autoridad sobre la base de alegaciones de concesión de un contrato ilegal para un nuevo edificio de la compañía de energía. A finales del año no había más información disponible respecto a este caso.

Antes del golpe de junio, el gobierno permitía el acceso a la información pública a ciudadanos y no ciudadanos, inclusive a los medios de comunicación extranjeros; esto era a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que operaba un sitio Web donde los ciudadanos podían solicitar información de las dependencias gubernamentales. El 13 de marzo, *El Herald* informó que el IAIP estaba intentando asegurar que el poder ejecutivo publicara en el sitio Web su información financiera, tal como lo exige la ley de transparencia y acceso a la información.

El 6 de enero, el Ministerio Público anunció que había reabierto el caso de abril de 2008 de una red dedicada a la trata de inmigrantes cubanos en el país. Para finales del año, las autoridades no habían arrestado a nadie ni anunciado que hubiera algún sospechoso.

No hubo información adicional sobre algún avance en el caso de corrupción de agosto de 2008 en contra de Guillermo Seaman, quien estaba a espera de su juicio acusado de haber autorizado licencias fraudulentas para empleados de líneas aéreas.

Sección 5 Actitud del gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamentales de presuntas violaciones de los derechos humanos

Varios grupos de derechos humanos locales e internacionales operaron en el país, investigando casos referentes a derechos humanos y publicando sus resultados. Antes del golpe de junio, los funcionarios del gobierno generalmente cooperaban con las ONG y, con ciertas excepciones notables, se mostraban receptivos a los puntos de vista de las ONG.

El 11 de agosto, la policía arrestó al defensor de derechos humanos Alex Matamoros, después de que intentara hablar con la policía sobre el arresto del estudiante José Elcer Sabillón durante una manifestación en contra del golpe. El 12 de agosto, la policía liberó a Matamoros sin haber presentado ningún cargo en su contra.

El 12 de agosto, grupos de la sociedad civil sostuvieron que un miembro de las fuerzas de seguridad golpeó con una porra y tiró al suelo a las defensoras de derechos humanos Dina Meza y Leyla Elisa Díaz, quienes filmaban el arresto de un manifestante en contra del golpe frente al edificio del Congreso en Tegucigalpa.

No hubo información adicional sobre el homicidio a manos de desconocidos de Luis Gustavo Galeano Romero, quien fuera educador y promotor de la delegación de la CONADEH en Tocoa, departamento de Colón.

El 19 de marzo, un tribunal en Tegucigalpa condenó a César Damián Amador y Ramón Eusebio Solís a 21 años de prisión por el asesinato en 2006 del abogado Dionisio Díaz García de la Asociación para una Sociedad más Justa.

En julio, la CIDH criticó la deposición y exilio del presidente Zelaya y el exilio de la ministro de relaciones exteriores Patricia Rodas. La Comisión expresó su grave preocupación respecto a la implementación por parte del régimen de facto del decreto ejecutivo que limitaba la libertad de circulación, reunión y expresión durante las horas del toque de queda. La Comisión también exhortó al régimen de facto a implementar medidas cautelares para proteger a 50 personas, entre ellas la ministro de relaciones exteriores Patricia Rodas.

Tras su visita al país en agosto, la delegación de la CIDH redactó un informe preliminar donde documentaba varias violaciones a los derechos humanos, que incluían el uso desproporcionado de la fuerza por la policía, la detención arbitraria de miles de personas, la implementación arbitraria de las horas del toque de queda, y violaciones a la libertad de expresión. La delegación puso especial atención a las muertes supuestamente relacionadas con la crisis política. El 21 de agosto, se dijo que el régimen de facto declaró que en el informe preliminar de la CIDH “no [había] grandes sorpresas”.

La CONADEH estuvo encabezada por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos Ramón Custodio López. Se informó que el comisionado tenía acceso libre a todas las instituciones y centros de detención civiles y militares. En general, el gobierno cooperaba con la comisión, mas no le asignaba suficientes recursos financieros o de otro tipo.

Después del golpe de junio, supuestamente Custodio estaba renuente a solicitar investigaciones de las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por el régimen de facto. Durante el año, la CONADEH redactó múltiples comunicados de prensa sobre varios temas,

entre los que hubo declaraciones políticas sobre el golpe de junio. La ONG Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH y otros grupos de derechos humanos expresaron su descontento con el trabajo de la CONADEH. El 1 de julio, varios abogados firmaron y circularon una carta pública en la que solicitaban a la Federación Iberoamericana del Ombudsman investigar el manejo de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte del Comisionado Custodio después del golpe de junio. En contraste, el 21 de agosto, un grupo cívico a favor del régimen de facto, la Alianza por Honduras en Paz y Democracia, publicó un anuncio de una plana completa en el periódico *La Tribuna* donde elogiaba el trabajo de Custodio a favor de los derechos humanos.

Sección 6 Discriminación, abuso social y trata de personas

La ley prohíbe la discriminación por razones de raza, género, discapacidad, idioma o estado social; sin embargo, en la práctica no se implementó eficazmente. Las elites políticas, militares y sociales generalmente gozaron de impunidad en el sistema legal. Las mujeres estuvieron sometidas a discriminación social y económica y, junto con otros grupos vulnerables, fueron víctimas del deterioro de la protección a los derechos humanos después del golpe de junio.

Mujeres

La ley penaliza todos los tipos de violación, incluyendo la violación conyugal. Con la excepción de la violación conyugal, donde cada caso se evalúa por separado, la violación es considerada un delito público. El violador puede ser procesado incluso si la víctima no presenta una denuncia. Las sanciones por violación van de tres a nueve años de prisión, y en la práctica los tribunales implementaron estas penas. Entre enero y diciembre, la policía registró 1,266 casos de violación. A finales del año no había información disponible respecto a la magnitud del problema de la violación o sobre el número de procesamientos o castigos.

Durante todo el año hubo violencia hacia la mujer, incluso asesinatos sistemáticos. La ley penaliza la violencia doméstica con entre dos y cuatro años de prisión. Las únicas sanciones legales para formas más leves de abuso doméstico son el servicio social y la detención preventiva cuando el violador es encontrado en flagrante. La ley establece una pena máxima de tres años de prisión por desobedecer una orden de restricción relacionada con el delito de violencia intrafamiliar. El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras informó que hasta septiembre hubo 289 asesinatos de mujeres, comparado con los 269 registrados entre enero y septiembre de 2008.

La delegación de la CIDH informó que después del golpe de junio, algunos miembros de la policía y el ejército sometieron a las mujeres detenidas en las manifestaciones políticas a manoseos, insultos verbales y sexuales, palizas y otros tipos de abuso e intimidación. La ONG Centro de Derechos de Mujeres afirmó que muchas de las víctimas eran renuentes o temían radicar una denuncia debido a que no confiaban en el sistema judicial ni en la policía. Para finales del año, la fiscalía estaba investigando al menos un caso de violación a manos de la policía, que presuntamente estaba relacionado con las actividades de la víctima en contra del golpe de estado (véase la sección 1.c).

Ni el gobierno del presidente Zelaya ni el régimen de facto implementaron la ley eficazmente respecto al abuso doméstico. El Ministerio Público declaró que la violencia doméstica representaba la mayor parte de las denuncias radicadas.

Entre enero y mayo, el Ministerio Público recibió más de 2000 denuncias de abuso doméstico. La Fiscalía Especial de la Mujer informó que entre enero y marzo recibió 57 casos de muertes violentas de mujeres.

El gobierno del presidente Zelaya trabajaba con CARE y otras ONG para proporcionar a los agentes de policía capacitación especializada para implementar la ley relativa a la violencia doméstica. Durante la administración del presidente Zelaya había dos albergues para mujeres maltratadas operados por ONG. El albergue en Tegucigalpa tenía cupo para 20 mujeres y sus familias. Además, seis centros privados para mujeres maltratadas ofrecían asistencia legal, médica y psicológica. Había 15 ONG de la sociedad civil agrupadas bajo el Colectivo de Mujeres contra la Violencia que participaban en la lucha contra la violencia hacia la mujer. No hubo información disponible sobre el funcionamiento de los albergues durante el periodo del régimen de facto.

Aunque la prostitución es legal para adultos mayores de 18 años y está bastante generalizada, la ley prohíbe promover o facilitar la prostitución. Hubo trata de mujeres para su explotación sexual y servidumbre por deudas.

La ley prohíbe el acoso sexual en el lugar de trabajo y establece penas de uno a tres años de prisión. El acoso sexual continuó siendo un problema, pero el gobierno no implementó la ley eficazmente.

Las parejas e individuos gozaron de los derechos básicos de decidir libre y responsablemente la cantidad de hijos, el espaciamiento entre ellos y el tiempo entre embarazos. La información sobre el acceso a la contracepción estuvo ampliamente disponible, y no hubo discriminación, violencia o coerción en el acceso a la contracepción. El acceso a personal capacitado durante y después del parto, incluso a cuidados obstétricos esenciales, sólo estuvo al alcance de quien pudiera pagarlo. No se supo que hubiera diferencias entre mujeres y hombres en el acceso al diagnóstico y tratamiento para infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH.

Aunque la ley establece igualdad de derechos para las mujeres y los hombres, incluyendo los derechos de propiedad en los casos de divorcio, en la práctica las mujeres no gozaron de dichos derechos.

La mayoría de las mujeres que trabajaban estuvieron empleadas en ocupaciones informales de menor paga, como el servicio doméstico, que no cuentan protección legal o reglamentación. Las mujeres tuvieron una muy pequeña representación en la mayoría de las profesiones, y las actitudes culturales limitaron sus oportunidades profesionales. La ley establece que las mujeres tienen el mismo acceso a la educación que los hombres. La ley exige a los empleadores pagar a las mujeres el mismo salario que a los hombres por realizar un trabajo equivalente; pero los empleadores frecuentemente clasificaron los trabajos de las mujeres en un nivel más bajo de exigencia que los de los hombres para justificar los salarios más bajos. A pesar de las

protecciones que la ley otorga de salarios más bajos por razón de género, las trabajadoras en las industrias de exportación de textiles continuaron informando que eran obligadas a realizarse pruebas de embarazo como condición de empleo.

El Instituto Nacional de la Mujer desarrolla las políticas gubernamentales de la mujer y de género. Varias ONG trabajaron activamente a favor de los asuntos de la mujer, incluyendo el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, que trabajó con las cuestiones de trata de personas, explotación sexual comercial, empleadas en las fábricas de ropa y trabajadoras domésticas.

Menores de edad

Hubo amplio acceso para registrar nacimientos. Según la Constitución, la ciudadanía se obtiene por nacimiento en el territorio del país, de los padres o por naturalización.

El maltrato a menores fue un grave problema. La ley establece penas de prisión de hasta tres años para las personas condenadas por maltrato a menores. No hubo información disponible sobre el número de casos registrados de maltrato a menores.

El maltrato de jóvenes y niños en los barrios pobres continuó siendo un problema grave. La policía, pandillas y miembros de la población general cometieron actos de violencia hacia jóvenes y niños pobres. Grupos de derechos humanos sostuvieron que civiles e individuos parte de las fuerzas de seguridad usaron fuerza mortífera injustificada contra presuntos delincuentes habituales o supuestos pandilleros, así como contra otros jóvenes que no participaban en actividades delictivas. Casa Alianza registró dos casos de tratamiento cruel de menores a manos de la policía. A finales del año, las autoridades estaban investigando estos casos.

La trata de niños para su explotación sexual comercial y prostitución infantil fue un problema. Las sanciones por facilitar la prostitución son de entre nueve y 15 años de prisión y una multa que va desde 50.000 Lempiras a 100.000 Lempiras (\$2,360 a \$5,290). La pena se incrementa en un cincuenta por ciento si la víctima es menor de 18 años de edad. No hay una ley contra el estupro, pero la pena por la violación de un niño menor de 12 años es de 15 a 20 años de prisión y entre nueve y trece años si la víctima tiene 13 años de edad o más. La ley prohíbe el uso de niños menores de 18 años de edad en exhibiciones o representaciones de naturaleza sexual y en la producción de pornografía.

La ley prohíbe la asociación ilícita, que incluye ser parte de pandillas y del crimen organizado, y las sanciones para dichos delitos son prisión de tres a 12 años. Las estadísticas del final del año indicaron que había aproximadamente 36,000 miembros de pandillas, muchos de ellos menores de edad. Las pandillas se limitaron principalmente a las zonas de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Organizaciones para la protección de los derechos de los niños calcularon que había 20,000 niños de la calle, de los cuales sólo la mitad tenía refugio, y que la mayoría de los niños de la calle consumía sustancias ilegales, que incluyen marihuana y sustancias inhalantes como pegamento. Muchos niños de la calle fueron víctimas del abuso o la explotación sexual.

El gobierno municipal de Tegucigalpa manejó 12 albergues temporales, con cupo para 240 niños. Casa Alianza manejó tres albergues (con cupo para 175 niños) para víctimas de explotación sexual comercial, niños de la calle y niños con problemas de abuso de sustancias. La ONG *Feed the Children* administró un albergue para 40 varones en La Ceiba. Casa Alianza calculó que 73 niñas menores de edad (de entre 12 y 17 años) que habían sido víctimas de la trata habían estado en sus albergues y participado en programas de recuperación. Cuarenta y seis de ellas habían sido víctimas de la trata dentro del país y 27 habían sido trasladadas al extranjero para su trata. Casa Alianza dio asistencia a aproximadamente 2,560 menores de edad, e intentó reintegrar a sus familias el número más alto posible. Centros de otras organizaciones privadas y la dependencia gubernamental Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia (IHNFA) también albergaron a niños de la calle y cuidaron de aproximadamente 2,500 niños.

Trata de personas

La ley penaliza la trata de personas para cualquier propósito; sin embargo, hubo informes de trata de personas dentro del territorio nacional y en los que se citó el país como lugar de destino y de procedencia.

El país fue principalmente país de origen y de tránsito de mujeres y menores víctimas de la trata con fines de explotación sexual comercial. Las mujeres y menores víctimas de la trata fueron transportados a Belice, El Salvador, Guatemala, México, y también dentro del país, con mayor frecuencia de zonas rurales a urbanas. La mayoría de las víctimas extranjeras de la trata cuyo destino fue Honduras tuvieron como lugar de procedencia los países vecinos.

Antes del golpe de junio, el director del IHNFA estimó que más de 10,000 menores eran susceptibles a ser explotados sexualmente, y de estos, el 98 por ciento eran niñas. En la zona metropolitana de Tegucigalpa, se estima que varios cientos de menores fueron víctimas de la explotación sexual comercial durante el año. No hubo información disponible sobre la situación de los niños en situación vulnerable durante el régimen de facto.

Las pandillas, el crimen organizado y los contrabandistas de personas fueron supuestamente los principales tratantes para la explotación sexual comercial. Hubo informes sobre familias vendieron a sus hijas para la trata. Informes adicionales indicaron que empresarios prometían trabajos lucrativos en el extranjero y en zonas urbanas del país como una forma de atrapar víctimas. Hubo informes sobre víctimas de explotación sexual a manos del crimen organizado en Guatemala que reclutaban nuevas víctimas en Honduras. La trata de personas internacional se realizó de forma terrestre; el gobierno mantuvo control de las fronteras terrestres del país solamente en ciertos puntos de cruce. La trata se realizó usando tanto documentos válidos como falsificados.

Al final del año no hubo información adicional disponible sobre el caso de febrero de 2008 contra Emilio Fiallos Piña y su esposa Dora Rutilia Saucedo Fiallos, quienes fueron arrestados por presuntamente haber vendido a su hija de nueve años al abogado Conrado Zelaya Castellón para su explotación sexual.

La ley establece sanciones y define los delitos relacionados con la trata de personas, que incluyen incesto, actos de lujuria, abuso, prostitución, pornografía e infectar a alguien con VIH/SIDA. Las sanciones incluyen multas que van de 100,000 Lempiras a 500,000 Lempiras (entre \$5,300 y \$26,500) y prisión entre cuatro y 20 años. La ley no fue implementada con eficacia. La falta de financiamiento adecuado del gobierno para combatir la trata, la corrupción y el despido rutinario de empleados públicos limitó la capacidad del gobierno para enfrentar la trata de personas. En la Fiscalía Especial de la Niñez en Tegucigalpa, un abogado, cuatro investigadores del Ministerio Público y dos agentes de la DGIC están asignados a la lucha contra la trata de personas. En San Pedro Sula, dos fiscales cubrieron las cuestiones de la trata, mientras que en Choluteca, sólo un abogado.

La División Contra el Abuso, Trata y Explotación Sexual Comercial, unidad de la dirección de investigación criminal, realizó operaciones de detección en todo el país, incluyendo las carreteras, aeropuertos y puertos, y hoteles.

Para finales del año, el Ministerio Público había procesado 26 casos de trata de personas y explotación sexual comercial, había logrado condenar a 11, y estaba investigando otros 82 casos más. El ministerio no registró estadísticas independientes para los casos de trata de personas.

El 27 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció haber descubierto que 18 hondureños habían sido víctimas de la trata con fines de explotación laboral y transportados a Rumania, donde los empleadores les habían confiscado sus pasaportes, les habían proporcionado lugares para vivir deficientes, y se negaban a pagarles. A finales del año no había información adicional disponible respecto al caso.

El 15 de abril, la policía arrestó a Olga Marcia Salvador Sánchez en Cofradía, departamento de Cortés, y la acusó del delito de trata de personas para la prostitución de una menor de 14 años proveniente de Guatemala. Al final del año, la investigación seguía en pie.

En mayo, la policía arrestó a Avilio Gómez Sobral, Luis Enrique Soriano Mondragón y Teodosio Guzmán Pineda, con cargos por los delitos de trata de personas con agravante. Los tres supuestamente operaban una organización dedicada a la trata de mujeres y niñas de zonas rurales para su explotación sexual en Comayagua. A finales del año no había información adicional disponible respecto al caso.

En noviembre de 2008, Blanca Azucena Merio Amador y su hija Gloria Floriscelda Varela Amador fueron arrestadas por vender niñas menores de edad a hombres para su explotación sexual. Presuntamente tenían vínculos con una operación de trata mucho más grande. Cuando arrestaron a las tratantes, las autoridades pudieron liberar a una menor de edad que estaba siendo explotada sexualmente. A finales del año no había más información disponible respecto a este caso.

Al menos cuatro víctimas menores de edad fueron referidas a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para su repatriación. La OIM refirió a docenas de víctimas cada mes a albergues manejados por el gobierno y por ONG para proveerles asistencia. Las autoridades

repatriaron a tres menores de México y a uno de Nicaragua que habían sido víctimas de la trata para su explotación sexual.

Antes del golpe de junio, el gobierno continuó realizando capacitaciones en contra de la trata de personas para la policía, fiscales, jueces y estudiantes. El gobierno también trabajaba con ONG y la OIM para ubicar a las víctimas en albergues y proporcionarles asistencia para su reintegración. La Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas implementó un protocolo para la asistencia a las víctimas de la explotación sexual comercial, mientras que el Instituto para la Familia del gobierno se concentró en reintegrar a las víctimas menores a su familia y la sociedad. Sin embargo, el gobierno no proporcionó asistencia adecuada a las víctimas. La Fiscalía Especial de la Niñez informó que las actividades de trata de personas continuaron bajo el régimen de facto.

El informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas, titulado *Trafficking in Persons Report* puede consultarse en www.state.gov/g/tip.

Personas con discapacidades

La ley prohíbe la discriminación de personas con discapacidades físicas y mentales en el trabajo, la educación, el acceso a la atención médica y la prestación de otros servicios del estado; no obstante, el gobierno no hizo cumplir competentemente todas estas disposiciones. Por ley, es ilegal que un empleador discrimine a un trabajador debido a una discapacidad. Durante el año no hubo ningún informe de discriminación contra personas con discapacidad en el empleo, la educación, el acceso a la asistencia sanitaria o la prestación de otros servicios estatales. La ley exige que los edificios tengan accesos para las personas con discapacidades. En la práctica, pocos edificios eran accesibles, y el gobierno no implementó eficazmente leyes o programas para asegurar tal acceso.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional se concentró en cuestiones de importancia para las personas con discapacidades. Aun cuando la ley requiere que el Ministerio de Gobernación y de Justicia mantenga una oficina para las personas con discapacidades, el gobierno no proporcionó fondos ni personal para operar la oficina. Antes del golpe de junio, había un comisionado presidencial para las personas con discapacidad. No hubo información disponible si este puesto continuaba existiendo después del golpe de estado.

En marzo, las autoridades arrestaron al ex director Melvin Alvarado Díaz luego que siete estudiantes de la Escuela para Ciegos Pilar Salinas lo acusaran de haber abusado sexualmente de ellos. Al final del año, Alvarado había obtenido la liberación temporaria a la espera de su juicio.

El 1 de abril, el gobierno local de Puerto Cortés abrió una escuela específicamente para niños con síndrome de Down. La ciudad ya contaba con escuelas para estudiantes ciegos y sordos.

Poblaciones indígenas

Aproximadamente 621,000 personas, que constituye el 8 por ciento de la población, eran miembros de grupos indígenas y de otras minorías étnicas. Estos grupos, que incluyen a los

miskitos, tawahkas, pech, lencas, maya-chorti, nahuas, isleños y garífunas, se ubicaron en 362 comunidades y en general tuvieron poco o ningún poder político para tomar decisiones que afecten sus tierras, cultura, tradiciones, y la asignación de los recursos naturales.

La mayor parte de las tierras indígenas era de propiedad comunal, y proporcionaba el derecho al uso de la tierra a miembros individuales de la comunidad étnica. Frecuentemente, los títulos de propiedad de las tierras indígenas estaban mal definidos en documentos que datan de mitades del siglo XIX. La falta de títulos de propiedad claros fomentó los conflictos por invasiones y expropiaciones entre colonizadores no indígenas sin tierra, elites comerciales poderosas y entidades gubernamentales interesadas en explotar las costas, bosques y otras tierras tradicionalmente usadas u ocupadas por comunidades indígenas o de otras minorías étnicas. Las comunidades indígenas y no indígenas criticaron la supuesta complicidad del gobierno en la explotación de madera y otros recursos naturales en estas tierras. Los grupos indígenas afirmaban que sus sistemas comunales de tenencia de la tierra protegían más eficazmente sus tierras de las invasiones de terratenientes y grupos externos que realizaban actividades ilegales. Líderes garífunas declararon que grupos dedicados al contrabando de drogas y de otro tipo se habían apropiado ilícitamente de grandes territorios de sus tierras comunales.

Los garífunas y otros grupos indígenas realizaron varias protestas relacionadas con disputas sobre la tenencia de la tierra y su percepción de discriminación por parte del gobierno. Antes del golpe de junio, líderes garífunas continuaron sus peticiones al gobierno respecto a sus preocupaciones por el desarrollo comercial a gran escala en las tierras costeras tradicionalmente ocupadas y utilizadas por sus comunidades. El gobierno permitió el desarrollo turístico en las tierras bajo disputa a compañías privadas nacionales y extranjeras, otorgando contratos de arrendamiento de 100 años que a su expiración revertirán las tierras a los garífunas. Los líderes garífunas continuaron denunciando ante el gobierno y las ONG el hostigamiento, amenazas y agresiones de los que han sido víctima. No hubo información disponible sobre acciones tomadas por el régimen de facto en respuesta a las preocupaciones de la comunidad garífuna.

El 13 de abril, aproximadamente 3,000 miembros del grupo indígena maya-chortí cerraron el Parque Arqueológico de las Ruinas Mayas de Copán y exigieron que el gobierno cumpliera las promesas hechas a lo largo de los años de ayudar al grupo a establecer el título de propiedad de sus tierras ancestrales. No hubo información sobre alguna respuesta a las demandas de los maya-chortí por parte del gobierno de Zelaya o el régimen de facto. Sin embargo, los maya-chortí informaron que después del golpe de junio, el régimen de facto detuvo un programa de reparaciones de tierras e impuso restricciones a las transferencias bancarias para el financiamiento de los programas educativos de la comunidad.

El 18 de junio, el líder indígena Edgardo Benítez y miembros de la comunidad indígena miskito denunciaron ante la prensa un proyecto gubernamental que busca romper la tenencia comunal de la tierra y sustituirla con títulos de propiedad individuales en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Olancho. Sostuvieron que esto estaba causando daño ambiental a las tierras comunales en la Reserva de la Biósfera del Río Plátano.

No hubo ningún informe sobre avances en la investigación o arresto de sospechosos por el homicidio de los jóvenes tolupanes José Mastul y Geovanny Banegas Sevilla en marzo de 2008.

No hubo informes sobre avances en el caso de junio de 2008 del secuestro y la agresión física en contra del activista garífuna Santos Feliciano Aguilar Alvares a manos de 10 guardias de seguridad privada empleados de una compañía de bienes raíces en San Juan Tela, departamento de Atlántida.

El 8 de septiembre, un tribunal en La Ceiba exoneró a los militares Marco Antonio Rodríguez, Nelson Makeny, Edgar Portillo, David Edward Wilson Tabor, y Noé Hernandez Perez Carpio por el homicidio del miembro de la comunidad garífuna Guillermo Morales Herrera en la reserva de vida silvestre Cuero y Salado en septiembre de 2008.

El gobierno de Zelaya realizó esfuerzos mínimos por trabajar con los pueblos indígenas y abordar sus preocupaciones sobre la tenencia y el uso de las tierras tradicionales. En general los tribunales negaron recursos legales a las personas indígenas y frecuentemente favorecieron a las partes no indígenas que contaban con recursos e influencias. La falta de resarcimiento legal frecuentemente llevó a que personas indígenas intentaran recuperar sus tierras mediante la invasión de propiedad privada, por lo que las autoridades tomaron represalias y usaron la fuerza. No hubo información disponible sobre ninguna acción por parte del régimen de facto para abordar las preocupaciones sobre la tenencia de la tierra de la comunidad indígena.

Abuso social, discriminación y actos de violencia por motivo de orientación e identidad sexual

No existen leyes que se refieran a la discriminación debido a la orientación sexual; sin embargo, en la práctica, la discriminación social de personas que pertenecen a minorías sexuales fue generalizada. Muchas ONG indicaron que los delitos motivados por prejuicios aumentaron, especialmente en la temporada de campañas políticas. Representantes de las ONG que se concentran en los derechos a la diversidad sexual afirmaron que a lo largo del año las fuerzas de seguridad mataron y abusaron de sus miembros. En los casos en que personas lesbianas, gay, bisexuales o transgénero (LGBT) fueron encontradas muertas, la labor de la fiscalía frecuentemente se dificultó debido a que las víctimas habían ocultado su identidad u orientación sexual, o se estaban escondiendo de sus familias.

Las investigaciones penales no reconocieron “transgénero” como una categoría. Grupos a favor de los derechos de las minorías sexuales afirmaron que a lo largo del año las fuerzas de seguridad, dependencias gubernamentales y empleadores privados tuvieron prácticas de contratación discriminatorias de las personas gay. Estos grupos también informaron que debido a la intimidación, el temor a las represalias y la corrupción policial, las víctimas LGBT se mostraron renuentes a levantar cargos o a proceder con el procesamiento legal. En mayo, *Human Rights Watch* publicó un informe donde se documentaba la violencia dirigida específicamente hacia las personas transgénero en el país. El informe solicita que se derogue el lenguaje de las disposiciones legales que hablan de proteger del escándalo público, presuntamente usado por la policía para justificar la detención de las personas transgénero.

El 12 de enero y el 17 de mayo, cientos de personas LGBT se manifestaron en Tegucigalpa contra los delitos motivados por prejuicios. Pedían que el gobierno investigara los asesinatos

registrados desde 2008 de 28 personas que pertenecían a la comunidad de esta minoría sexual. Aunque la policía no impidió las manifestaciones, las autoridades no proporcionaron protección para los manifestantes. Los organizadores de los eventos de enero y mayo no solicitaron permiso previo para estas manifestaciones, como lo requiere la ley.

Hubo múltiples homicidios o ataques a personas, presumiblemente debido a su orientación sexual. La organización defensora de los derechos LGBT Red Lésbica Cattrachas informó que entre julio y diciembre, desconocidos asesinaron a 19 miembros de la comunidad LGBT y que una cantidad de personas gay huyeron del país por temor a la persecución social y de las fuerzas de seguridad. Un grupo de derechos humanos estimó que había registrado aproximadamente un caso mensual de personas LGBT que habían sido golpeadas con una pistola o víctimas de otros maltratos a manos de la policía. La ONG Asociación LGTB Arcoíris de Comayagüela operó una clínica de servicios médicos y siquiátricos que trataba entre siete y diez víctimas de delitos motivados por prejuicios al mes.

El 9 de enero, desconocidos mataron a tiros a Cynthia Nicole, una trabajadora sexual transgénero y conocida activista LGBT. En diciembre de 2008, unos hombres armados habían agredido físicamente a Cynthia Nicole. A finales del año, no había información disponible respecto a alguna investigación de estos incidentes.

El 3 de marzo, se informó que agresores desconocidos mataron a golpes a Delmer Joel Martínez de 18 años de edad, presuntamente porque creyeron que era homosexual, y arrastraron su cuerpo hasta un campo cercano a Nueva Suyapa, barrio de Tegucigalpa. No hubo información disponible respecto a alguna investigación del caso.

Después del golpe de junio, organizaciones de derechos humanos informaron de al menos dos casos en los que la policía amenazó de muerte a personas LGBT por su participación en manifestaciones en contra del golpe, diciéndoles: “Deberíamos matar a todos los homosexuales”. El 3 de julio, la CIDH solicitó que el régimen de facto otorgara medidas cautelares a cuatro activistas LGBT. En respuesta a la solicitud de la Comisión, el régimen de facto publicó un anuncio en el periódico *La Tribuna* donde divulgaba el nombre de todas las personas que habían recibido medidas cautelares a partir del 28 de junio. Ahí se informaba a las personas nombradas que se presentaran ante la Corte Suprema o llamaran a un número telefónico gubernamental. Defensores de derechos humanos informaron que ninguna de las personas cuyo nombre apareció publicado respondió a la solicitud del gobierno, y afirmó que el anuncio había sido una forma de intimidación de dichas personas.

El 29 de junio, desconocidos mataron de un tiro a la cabeza a la trabajadora sexual travesti Vicky Hernández Castillo (Jhonny Emilson Hernández) en San Pedro Sula. Defensores de derechos humanos sostuvieron que las fuerzas de seguridad fueron los responsables del homicidio porque se creía que Hernández Castillo murió mientras trabajaba durante las horas del toque de queda la noche del 28 de junio.

El 20 de septiembre, desconocidos dispararon y mataron a Salomé (Jorge Samuel Caravante) y Zaira (Carlos Ricardo), dos trabajadores travestis en Choloma, departamento de Cortés. A

finales del año, no había información disponible respecto a alguna investigación de estos homicidios.

El 4 de diciembre, se informó que desconocidos secuestraron y agredieron físicamente al activista LGBT Walter Tróchez, pero posteriormente lo liberaron. Tróchez le dijo a las organizaciones de derechos humanos que cuando estaba detenido, los secuestradores lo interrogaron sobre su participación en el movimiento en contra del golpe. El 13 de diciembre, desconocidos dispararon y mataron a Tróchez en Tegucigalpa. Al final del año, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos realizaba una investigación.

A finales del año no había información disponible sobre alguna respuesta del Comité de Derechos Humanos a la denuncia radicada en 2008 por defensores de los derechos LGBT respecto a informes de que las autoridades se negaron a entregarle a personas transgénero sus tarjetas de identidad porque los solicitantes traían maquillaje y accesorios femeninos.

A finales del año, Nelson Daniel Gaytán había sido acusado del delito de detención ilegal y estaba a la espera de su juicio por la detención y golpiza dada por policías al activista LGBT Donny Reyes en 2007. Se informó que la policía detuvo a Reyes en una celda con 57 pandilleros que lo violaron y golpearon.

Otros tipos de violencia social o discriminación

No hubo informes de violencia social o discriminación generalizada de personas debido a su estado de infección por el VIH/SIDA. Sin embargo, la ONG Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos informó que las autoridades se negaron a realizar la autopsia del cadáver de la trabajadora sexual Vicky Hernández Castillo porque creían que era VIH positiva.

La discriminación por edad en el trabajo continuó siendo un problema grave.

Sección 7 Derechos de los trabajadores

a. El derecho de asociación

La ley estipula el derecho de los trabajadores a crear sindicatos y a afiliarse al sindicato de su elección, pero en la práctica a los trabajadores les fue difícil ejercer este derecho. La ley permite que los sindicatos operen sin interferencia gubernamental. Sin embargo, la ley prohíbe a miembros de las fuerzas armadas y la policía organizarse en sindicatos, además de prohibir a los empleados públicos presentar solicitudes para organizar sindicatos o participar en contratos colectivos de trabajo. Se estima que hubo 519 sindicatos que representaron a aproximadamente el 8 por ciento de la fuerza laboral, excluyendo el sector agrícola. Para julio, aproximadamente el 13 por ciento de los 133,000 trabajadores de la maquila de ropa estaba sindicalizado. La ley prohíbe que haya más de dos sindicatos en la misma empresa, requiere de al menos 30 trabajadores para constituir un sindicato, prohíbe a ciudadanos extranjeros tener puestos directivos en el sindicato, y requiere que los dirigentes del sindicato estén empleados en la misma actividad económica que la que representa el sindicato.

Los líderes sindicales ocasionalmente fueron víctimas de violencia o amenazas. El 1 de abril, autoridades en San Pedro Sula arrestaron a Sergio Misael Murillo Jiménez y lo acusaron por los asesinatos en abril de 2008 de la líder sindical Altagracia Fuentes; de su acompañante, la líder sindical Yolanda Sánchez; y de su chófer, Juan Bautista Aceituno. El 11 de abril, autoridades en La Lima, departamento de Cortés, encontraron el cadáver de José Omar Fúnez Cruz, conocido como pandillero y sospechoso en el asesinato de Fuentes. El 4 de mayo, la policía arrestó a Alexander Armando Reyes Ferrera y a Elmer Alberto Orellana Dubon y los acusaron por los asesinatos de Fuentes, Sánchez y Aceituno. Las autoridades también arrestaron y levantaron cargos contra el agente de la policía Marvin Mauricio Aguilar por el delito de malversación de caudales públicos después de que no entregaron 58,500 lempiras (aproximadamente \$3,080) y \$1,000 encontrados en el automóvil de Fuentes.

A lo largo del año, desconocidos amenazaron de muerte telefónicamente a la activista sindical Evangelina Argueta, quien participó en un contrato colectivo de trabajo en la industria textil. Para final de año, las autoridades no habían cumplido con la solicitud de medidas cautelares para Argueta presentada por la CIDH el 7 de agosto.

La ley estipula el derecho a huelga, y los trabajadores ejercieron este derecho en la práctica. La ley prohíbe las huelgas en un amplio rango de actividades económicas consideradas como servicios esenciales, o en los sectores que al parecer del gobierno afecten los derechos individuales a la seguridad, la salud, la educación, la economía o la vida social. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó el que la ley negara el derecho a huelga a los trabajadores en el sector petrolero y a los trabajadores gubernamentales que no son empleados de empresas propiedad del estado.

En febrero, el Ombudsman de Derechos Humanos Ramón Custodio declaró que las huelgas de maestros eran ilegales, ya que dichas huelgas afectaban “el derecho de los niños a la educación”.

Aunque los trabajadores públicos ocasionalmente realizaron paros laborales ilegales sin ninguna represalia, el Ministro del Trabajo tiene el poder de declarar ilegal la protesta y a despedir a los trabajadores partícipes. Algunas de las restricciones legales a las huelgas son que las federaciones y confederaciones sindicales tienen prohibido convocar a huelga, y que para convocar a huelga es necesario contar con una mayoría de dos tercios de los votos de la membresía total del sindicato.

Después del golpe de junio, los maestros participaron en manifestaciones en contra del golpe durante varios meses. Entre julio y agosto, se dijo que el Ministerio Público recibió 27 denuncias de padres por el ausentismo de los maestros en las escuelas públicas. El 28 de agosto, la prensa informó que el ministro de educación y el ministro de finanzas del régimen de facto declararon que los maestros que participaran en manifestaciones políticas en lugar de presentarse a trabajar, no recibirían su salario.

b. El derecho de organización y negociación colectiva

La ley establece el derecho de organización y negociación colectiva, pero el gobierno no protegió este derecho en la práctica. Aun cuando la ley exige que el empleador inicie la negociación del contrato colectivo una vez que los trabajadores hayan organizado un sindicato, los empleadores frecuentemente se rehusaron impunemente a participar en la negociación.

Aunque la ley prohíbe que el empleador castigue a los empleados por participar en actividades sindicales, fue una práctica común que los empleadores amenazaran con clausurar las empresas sindicalizadas y hostigaran o despidieran a los trabajadores que buscaban sindicalizarse. Algunas compañías extranjeras clausuraron sus operaciones cuando fueron notificadas de que sus trabajadores pretendían organizar un sindicato.

El Ministerio del Trabajo tiene la competencia para tomar determinaciones administrativas y multar a las compañías por realizar despidos injustificados, pero solamente un tribunal puede ordenar la restitución de trabajadores. Los empleadores frecuentemente no obedecieron las órdenes judiciales que requerían la restitución de trabajadores que fueron despedidos por participar en actividades sindicales; la falta de restitución de los trabajadores fue un problema grave.

Aunque la ley prohíbe la elaboración de “listas negras”, hubo pruebas fidedignas que los empleadores de maquiladoras de ropa lo hacían impunemente con los empleados que buscaban sindicalizarse. Hubo informes de trabajadores de la maquila de ropa que presuntamente fueron despedidos por su actividad sindical dado que fueron contratados por una o dos semanas, y luego despedidos sin ninguna explicación. Los empleados de las maquiladoras de ropa informaron que vieron registros informáticos que incluían información sobre su participación previa en sindicatos. Algunos empleadores les informaron a los trabajadores anteriormente miembros de un sindicato que no podían ser contratados debido a su actividad sindical previa.

El gobierno no asignó recursos adecuados al Ministerio del Trabajo para permitir a los inspectores laborales cumplir con sus obligaciones. Las oficinas de inspección laboral del país no contaron con los recursos para cubrir los gastos de viaje para realizar inspecciones y solicitaban que el gobierno les proporcionara transporte y otras necesidades para que los inspectores pudieran desempeñar sus deberes.

El 14 de noviembre, Russell Athletic negoció un acuerdo con los representantes de los trabajadores de la fábrica de Jerzees de Honduras (JDH) respecto a la clausura en enero de la fábrica JDH y el despido ilícito de aproximadamente 1,800 trabajadores. La clausura de la fábrica se realizó después de que los trabajadores registraron legalmente su sindicato y habían iniciado negociaciones salariales. El acuerdo incluía establecer una fábrica sindicalizada, ofrecía empleo a los antiguos trabajadores de JDH, y capacitación conjunta entre la compañía y el sindicato.

No hubo ningún avance nuevo respecto a la investigación del Ministerio Público sobre el paradero de la líder sindical Lorna Jackson, quien permanecía desaparecida desde finales de 2008 tras recibir amenazas de muerte relacionadas con el despido de 1,800 trabajadores de las fábricas Alcoa en El Progreso y Choloma en agosto de 2008.

Las huelgas están permitidas en las 102 zonas francas industriales registradas y en los 19 parques industriales que operan como tales. Sin embargo, la ley exige que las huelgas no pueden impedir las operaciones de otras fábricas en los parques industriales. Veintiséis compañías adicionales que proporcionaban servicios para los parques industriales tuvieron sus propias zonas francas, fuera de los parques industriales. Ante la falta de sindicatos y negociación colectiva, varias compañías en las zonas francas industriales instituyeron asociaciones de solidaridad que, en cierta medida, funcionaron como sindicatos de la compañía con el objeto de fijar salarios y negociar condiciones de trabajo. Otras compañías en las zonas francas industriales utilizaron el salario mínimo para establecer los salarios de nivel inicial, y ajustaron los tabuladores de salarios mediante la negociación con grupos de trabajadores de la planta y otros empleados, basándose en la antigüedad, capacidades, categorías de trabajo y otros criterios.

c. Prohibición de trabajo forzado u obligatorio

En general, la ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio. Sin embargo, hubo informes de trata de menores para su explotación sexual comercial y de prostitución infantil.

d. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para el empleo

La ley regula el trabajo infantil y establece que los menores entre los 14 y 18 años de edad no pueden trabajar a menos que las autoridades determinen que el trabajo es indispensable para los ingresos familiares y no interferirá con su educación. La Constitución y la ley establecen que el número máximo de horas de trabajo para los menores de menos de 18 años de edad es de seis horas diarias y 30 horas a la semana. Los padres o guardianes legales pueden solicitar un permiso especial al Ministerio del Trabajo que permite trabajar a los menores entre los 14 y 15 años de edad, siempre y cuando el Ministerio realice un estudio de hogar para asegurar que el menor demuestre la necesidad económica de trabajar, y que el menor no trabajará fuera del país o en condiciones peligrosas de trabajo, que incluyen la pesca de altura.

La ley prohíbe el trabajo nocturno y las horas extras para los menores de 16 años, y requiere que los empleadores que tengan trabajando en sus instalaciones comerciales a más de 20 menores de edad escolar deben proporcionar espacio para una escuela. La ley sanciona con tres a cinco años de prisión a las personas que violen las leyes del trabajo infantil. En la práctica, la gran mayoría de menores de edad trabajaron sin contar con permiso del ministerio.

El trabajo infantil constituyó un problema. Una encuesta de hogares en mayo mostró que aproximadamente 170,000 menores de edad entre los cinco y 14 años eran trabajadores infantiles, la mayoría de ellos en las zonas rurales. Los menores frecuentemente trabajaron en la cosecha de melones, café y caña de azúcar, o hurgando en los tiraderos de basura; trabajaron en los sectores forestal, de caza o de pesca; y trabajaron como marineros y buzos en la industria de la langosta. Los menores trabajaron como sirvientes domésticos, en la venta de bienes como fruta, de limosneros, lavando coches, de cargadores, y empleados en la producción de cal y piedra caliza. La mayor parte del trabajo infantil fue en las zonas rurales. Entre las peores formas de trabajo infantil estuvieron la pesca de langosta y la cosecha de café y caña de azúcar. Los menores trabajaron por necesidad económica junto con otros miembros de su familia. En su informe de 2009, el Comité de Expertos de la OIT destacó que un alto número de los menores

dedicados al trabajo doméstico, y también de las víctimas infantiles de la explotación sexual comercial, eran niñas. Los medios de comunicación informaron que se había encontrado a niños de la calle trabajando como mulas de drogas en Tegucigalpa y otras ciudades del país.

El gobierno no dedicó recursos adecuados ni inspectores para prevenir, dar seguimiento o monitorear el cumplimiento de las leyes laborales. El Ministerio del Trabajo, la dependencia gubernamental responsable de aplicar las leyes del trabajo infantil, no implementó dichas leyes fuera del sector de la maquila de ropa, y hubo frecuentes violaciones a las leyes de trabajo infantil. No se supo de ningún cambio en la práctica de nombrar inspectores para el trabajo infantil solamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo cual aparentemente limitaba su capacidad para investigar las alegaciones de trabajo infantil.

El gobierno implementó programas sociales y educacionales para llegar a los niños en situaciones de riesgo; esto incluyó un programa de becas escolares para proporcionar dinero para útiles escolares a las familias más pobres, y un programa de educación alternativo a través de la radio y el aprendizaje a distancia para los niños en las zonas rurales lejanas donde hay pocas escuelas. El 25 de mayo, el gobierno lanzó el programa “Desafío 100”, una empresa conjunta público-privada con la participación de ONG, la Asociación Hondureña de Maquiladores y la Cámara de Comercio de Cortés. El programa se concentraba en ex pandilleros y les ayudaba a encontrar nuevos trabajos.

El gobierno del presidente Zelaya implementó un Plan Nacional de Acción para la Erradicación del Trabajo Infantil y un Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños. Estos programas supuestamente continuaron durante el régimen de facto. Los planes coordinaban acciones de dependencias gubernamentales para promover la cooperación y asistencia interinstitucional para las víctimas del trabajo infantil. Las medidas gubernamentales tuvieron un impacto mínimo en reducir el trabajo infantil a la luz de la pobreza extrema, las condiciones de hambruna en las zonas rurales, y la falta de trabajos para los que se gradúan de la escuela.

e. Condiciones aceptables de trabajo

En diciembre de 2008, el gobierno anunció un aumento general del 60 por ciento al salario mínimo, a 5,500 lempiras (aproximadamente \$290) mensuales para trabajadores en las ciudades y a 4,055 lempiras (\$213) para trabajadores rurales. Sin embargo, la industria textil y las zonas francas no fueron incluidas en los aumentos. El aumento hizo que el salario mínimo del sector privado (sin incluir la agricultura) estuviera a la par con el salario mínimo del sector público. En el sector agrícola, los empleadores frecuentemente no pagaron el salario mínimo. El salario mínimo nacional no proporcionó un nivel de vida decente para un trabajador y su familia.

El tabulador del salario mínimo diario se divide en 10 secciones, según el tamaño del lugar de empleo del trabajador. El tabulador osciló entre 55 lempiras (\$2.90) para la mano de hora no calificada y 135 lempiras (\$7.10) para los trabajadores en compañías de seguros y financieras. El salario mínimo lo fija una comisión compuesta de representantes del gobierno, el sector comercial y los sindicatos. La comisión negocia el nuevo salario mínimo, y si no se logra llegar a un acuerdo, el asunto pasa al presidente para su decisión.

La ley establece una semana de trabajo con un máximo de 44 horas, con por lo menos un periodo de descanso de 24 horas por cada seis días de trabajo. La ley requiere un pago por tiempo extra por las horas que superen la norma, y hay prohibiciones para el tiempo extra obligatorio excesivo. Los empleadores frecuentemente no se acataron a estos reglamentos debido al alto nivel de desempleo y subempleo, y por la falta de una implementación eficaz por parte del Ministerio del Trabajo.

Hubo acusaciones creíbles de horas extras obligatorias en las maquiladoras de ropa (en especial para las mujeres, que conformaron aproximadamente el 65 por ciento de la fuerza laboral de ese sector), en el sector de la seguridad privada, y los servicios domésticos. Organizaciones de derechos humanos informaron frecuentemente que en los sectores de seguridad privada y de los empleados domésticos, era común que los trabajadores se vieran obligados a trabajar más de 60 horas semanales y que percibieran solamente el límite legal de 44 horas. Los trabajadores extranjeros gozaron de igual protección bajo la ley.

El Ministerio del Trabajo es responsable de la implementación de las leyes nacionales de salud y seguridad ocupacional, pero no lo hizo de manera congruente o eficaz. Las normas de seguridad laborales no fueron implementadas correctamente, en especial en la industria de la construcción, en las maquiladoras de ropa y en las actividades de producción agrícola. Hubo denuncias que los administradores extranjeros en las zonas francas industriales no cumplieron con los reglamentos de salud y seguridad ocupacional. Los trabajadores en la producción de la piña y otras empresas agrícolas afirmaron que los empleadores los incluían en las “listas negras” si se quejaban con las autoridades sobre sus condiciones de trabajo.

La ONG Colectiva de Mujeres Hondureñas informó que muchas trabajadoras de la maquila de ropa tenían problemas en la espalda, el cuello y síndrome del túnel carpiano, además de enfermedades respiratorias (incluyendo tuberculosis), digestivas y de la piel. Atribuyeron estos problemas de salud al aire contaminado por polvo fino y pelusa de las telas, al ruido, la falta de ventilación, la falta de equipo de protección y las temperaturas extremas.

La ley no concede a los trabajadores el derecho a retirarse de una situación de trabajo peligrosa sin poner en peligro su continuidad laboral.

El Ministerio del Trabajo no investigó supuestas violaciones de las leyes de salud y seguridad ocupacional y otros problemas de derechos laborales en el caso de los aproximadamente 3,000 buzos pescadores de langosta, muchos de ellos pertenecientes a grupos indígenas y otras minorías étnicas, en La Moskitia, departamento de Gracias a Dios. Desde 2003, aproximadamente 365 buzos han perdido la vida, y al menos 2,000 han quedado discapacitados debido a la naturaleza peligrosa de su trabajo.